



# Periódico Oficial

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO



REGISTRO POSTAL

IMPRESOS AUTORIZADOS POR SEPOMEX

PERMISO

Nº IM10-0008

TOMO CCXXXV

DURANGO, DGO.,

JUEVES 12 DE

NOVIEMBRE DE 2020

**No. 91**

DIRECTOR  
RESPONSABLE

EL C. SECRETARIO  
GENERAL DE GOBIERNO  
DEL ESTADO

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES  
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE  
PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

PODER EJECUTIVO  
CONTENIDO

EVALUACIÓN.-	ESPECÍFICA DEL PROGRAMA ESMERALDA.	PAG. 2
EVALUACIÓN.-	ESPECÍFICA DEL SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO.	PAG. 8
EVALUACIÓN.-	ESPECÍFICA DEL SISTEMA DE AGUA DE CANATLÁN EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN.	PAG. 12
EVALUACIÓN.-	ESPECÍFICA DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.	PAG. 16
EVALUACIÓN.-	DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE DURANGO.	PAG. 20
RELACIÓN.-	DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE DURANGO AGRUPADAS POR SECTOR.	PAG. 27
SENTENCIA.-	DEL JUICIO AGRARIO: 22/1998, DEL POBLADO FRANCISCO MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO EN ACCIÓN TERCERA AMPLIACIÓN DEL EJIDO POR INCORPORACIÓN DE TIERRAS AL RÉGIMEN EJIDAL.	PAG. 32



En cumplimiento del artículo 25 numeral 6 de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, se publica el resultado de la:

## Evaluación Específica del Programa Esmeralda

Informe completo disponible en:  
<https://inevap.org.mx/evaluaciones>

**Resumen ejecutivo**

En 2006, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Durango (SSP) creó el Programa Esmeralda (PE) para atender casos de violencia familiar y contra las mujeres mediante la asesoría psicológica, legal y en trabajo social vía telefónica como complemento del servicio del número de emergencias 911 (NE911).

En la práctica, la atención del PE comienza cuando el NE911 transfiere una llamada al programa porque considera que requiere atención adicional. El PE recibe estas llamadas y las asigna a sus operadoras para brindarles asesoría telefónica y/o canalizarlas hacia otras instancias de apoyo según el caso.

Con el tiempo, el PE fue ampliando el alcance de su atención, no solo en términos de cobertura geográfica, sino también por la variedad de situaciones que atiende. De forma paulatina, pero drástica, el PE pasó de un servicio enfocado en casos de violencia familiar y de género —lo cual está suficientemente justificado por la magnitud y consecuencias de este problema público—, a un servicio de atención ciudadana que recibe consultas y reportes de la población, y de asesoría a personas en crisis desde casos de cualquier tipo de hasta contención de intentos suicidas.

En este sentido, durante los últimos años el PE se ha convertido en una extensión local del NE911 que descarga las llamadas que no son de emergencias de este servicio o que amplía la atención mediante la asesoría especializada.

Junto con la atención telefónica, el PE ofrece el rescate de las personas en situaciones de violencia extrema mediante una unidad móvil y el seguimiento de los casos que atiende hasta que estos se resuelven judicialmente o por decisión de las personas atendidas.

La evaluación específica del PE busca para valorar la calidad, suficiencia y resultados de los procesos y protocolos de la intervención para alcanzar sus objetivos. A través de la interpretación de la información disponible, la evaluación emite juicios valorativos y propone vías de mejora para aumentar la capacidad del programa de entregar un servicio seguro, suficiente y de calidad.

***Principales hallazgos***

**Para que el servicio del PE sea efectivo, su implementación requiere de coordinación con otras entidades del gobierno incluso antes y después de la atención telefónica.**

Uno de los factores que obstaculiza la operación del PE ocurre en la transferencia de las llamadas. Si bien, el diseño inicial de la intervención tenía un enfoque particular, ahora se ha ampliado hasta una gran diversidad de situaciones—de hecho, se documentan 126 motivos distintos de las llamadas—. El PE no tiene control sobre las llamadas que el NE911 le transfiere, puesto que no existen criterios documentados al respecto; los registros indican



que, durante el 2020, casi el 47% de las llamadas que entraron al NE911 se pasaron al PE (ver Gráfica 1).

En este caso, dada la capacidad y diseño del PE, mientras mayor sea el alcance de la intervención, menor será la posibilidad de atender con calidad y oportunidad todas las situaciones que lleguen al programa.

Además de la coordinación indispensable que el PE debe establecer con el NE911 para la transferencia de llamadas, es necesario que el programa se coordine formalmente con las instancias externas hacia las cuales se canalizan a los usuarios del servicio cuando los casos lo requieren.

**Los protocolos de atención del PE son poco detallados o inexistentes sobre los pasos clave de la implementación del programa.** En los servicios de atención telefónica, los protocolos son particularmente importantes, sobre todo cuando se reciben llamadas de personas en crisis o en situaciones de violencia. La redacción de tales protocolos debe cubrir todos los pasos de la atención y anticipar las posibles variaciones e incidentes que sucedan en esta. La idea de contar con protocolos no es el cumplimiento de un requisito más, sino asegurar la calidad y pertinencia de la atención.

El PE documenta algunos de los protocolos necesarios para su operación, pero solo cubren algunos de los pasos de la implementación y son poco detallados para guiar la actuación de las funcionarias. En particular, se espera que los protocolos de la operación del PE cubran, al menos, la recepción, distribución, contestación, procesamiento, transferencia, documentación y seguimiento de las llamadas, así como el despacho y atención de la unidad de rescate y el manejo de las llamadas no convencionales.

**El PE documenta y sistematiza las llamadas que recibe, pero esta información no se utiliza para caracterizar y estimar la demanda del servicio.** Desde el 2018 hasta agosto del 2020, el PE ha recibido 55,091 llamadas, que significan poco más de 20 mil llamadas anuales en promedio. Del 2018 al 2019 el PE registró un aumento de llamadas del 8.3% (ver Gráfica 3).

El PE recibe en promedio 57 llamadas diarias, que equivalen a 2 llamadas cada hora. Sin embargo, este último valor cambia según días y horarios. Los fines de semana suelen entrar más llamadas al PE por hora que los días entre semana, sobre todo de las 18 a 6 horas (ver Gráfica 8).

Del municipio de Durango se han recibido cerca de 30 mil llamadas al PE, que significan 45 llamadas por cada 1,000 habitantes, mientras que en Gómez Palacio se emiten 56 llamadas por cada 1000 habitantes (ver Tabla 1).

Ex



En cuanto a los motivos de las llamadas, una tercera parte se clasifica como apoyo a la ciudadanía, otra como casos de violencia familiar, mientras que la tercera parte restante se distribuye entre más de 100 motivos registrados.

**De acuerdo con la capacidad de atención del PE, existe el riesgo de no cubrir totalmente la demanda en el centro de atención de Gómez Palacio.** El PE tiene 2 centros de atención: Durango y Gómez Palacio, entre los cuales se divide el servicio para los municipios. El primero ha atendido a: Durango, Guadalupe Victoria, Cuencamé, Pánuco de Coronado, Canatlán, Peñón Blanco, San Juan del Río, Nazas, Santa Clara, San Luis del Cordero, General Simón Bolívar, Hidalgo, Mezquital y Tamazula; mientras que el segundo ha servido a: Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí y San Juan de Guadalupe (ver Figura 7).

De acuerdo con los cálculos de intensidad de tráfico telefónico y probabilidad de bloqueo, en el centro de atención de Gómez Palacio, de las 20 a 23 horas hay una probabilidad media de que 2 de cada 10 llamadas no puedan ser atendidas; los fines de semana hasta 3 de cada 10 llamadas corren el riesgo de ser rechazadas entre las 21 y 22 horas.

Estos hallazgos contrastan con los del centro de atención de Durango, lo cual se explica por la capacidad diferenciada entre ambos centros. Gómez Palacio tiene la mitad de las líneas telefónicas disponibles por hora que Durango, aunque solo recibe 17% menos llamadas. Para garantizar la seguridad y oportunidad del servicio en la región de La Laguna, el PE debe plantearse la necesidad de aumentar su capacidad de respuesta en este centro de atención.

**El PE debe configurar estrategias de capacitación y manejo del estrés para su personal a fin de asegurar la efectividad y calidad del servicio.** Esto implica, al menos, 2 vertientes: la capacitación y especialización, y manejo del estrés de todo el personal.

En cuanto a este asunto, no se encontró evidencia sobre capacitaciones en conocimiento, habilidades y calidad en el servicio que haya recibido el personal del PE, ni sobre la previsión de esquemas de autocuidado para mantener su salud mental a pesar de que el modelo de atención del PE hace que su personal esté expuesto regularmente a circunstancias de estrés, crisis, enojo y otras alteraciones emocionales.

**Si el PE prioriza la mejora del servicio que entrega, es indispensable monitorear indicadores de disponibilidad, eficiencia y calidad del servicio.** La documentación del PE incluye indicadores para monitorear y evaluar al programa, pero solo miden el avance de acciones intrínsecas a la implementación del PE o el progreso de la programación y no el desempeño de la intervención.

De forma general, el desempeño de los centros de atención telefónica puede medirse en 3 dimensiones: disponibilidad, eficiencia y calidad. Cada dimensión tiene indicadores específicos para monitorear y evaluar todas las partes del servicio (ver Tabla 3).



Evaluación Específica del Programa Esmeralda  
PAE 2020

### *Conclusiones y valoración final*

La evaluación específica del PE se enfoca en los elementos organizacionales, operativos y técnicos que pueden limitar el logro de sus resultados y señala el tamaño de su desafío para garantizar la calidad, eficacia, seguridad y suficiencia del servicio que entrega.

A lo largo del texto, la evaluación insiste que, a pesar de cubrir una brecha de demanda de la población, la enorme variedad de asuntos que atiende actualmente el PE se contrapone con el diseño y justificación de la intervención, añade complejidad a la operación, impone presión sobre sus recursos y restringe la oportunidad para atender todas llamadas con el mismo nivel de servicio.

Las debilidades del PE se vinculan con el alcance de su documentación sobre coordinación interinstitucional y protocolos de atención, estrategias de capacitación y cuidado de su personal, caracterización y estimación de la demanda del servicio y mecanismos e instrumentos de medición del desempeño. Mientras que las fortalezas de la intervención se refieren la sistematización de sus registros de atención y al compromiso e involucramiento profundo de sus funcionarias.

### *Propuesta de recomendaciones y observaciones*

Como alternativas de mejora, la evaluación recomienda, de inicio, modificar el alcance de la atención de la intervención de acuerdo con sus capacidades, objetivos y prioridades. La elección de qué ruta seguir es exclusiva del gobierno y las responsables del PE. La evaluación solo es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que documenta los retos y oportunidades del PE sobre su organización y operación para alcanzar los resultados.

Independientemente de que tan amplia sea la atención del PE en cuanto al tipo de situaciones que reciba, para mejorar el programa se deben configurar mecanismos de coordinación formales con el NE911 y otras instancias externas, diseñar e implementar ~~protocolos de atención exhaustivos, desarrollar una agenda de capacitación continua y~~ estrategias de manejo del estrés para su personal, definir instrumentos y métodos de medición del desempeño y calcular sus requerimientos financieros.

94



Evaluación Específica del Programa Esmeralda  
PAE 2020



En la ciudad de Durango, Durango siendo las 11:33 once horas con treinta y tres minutos del día (30) treinta de octubre de 2020 de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, **HACE CONSTAR Y CERTIFICA** que el documento consiste en ( 5 ) cinco páginas útiles impresas al anverso y reverso, denominado Evaluación Específica del Programa Esmeralda de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, corresponde con el texto aprobado por el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango por **UNANIMIDAD** de votos, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el 30 de octubre del presente año, situación que certifica para los efectos legales conducentes.- Consejero Presidente, Juan Gamboa García; Consejera Secretaria Ejecutiva, Isaura Leticia Martos González; Consejero Administrador del Patrimonio, Emiliano Hernández Camargo; Rúbricas.

Mtro. Juan Gamboa García

Director General

del Instituto de Evaluación de Políticas  
Públicas del Estado de Durango.



En cumplimiento del artículo 25 numeral 6 de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, se publica el resultado de la:

## Evaluación Específica del Sistema de Agua de Peñón Blanco

Informe completo disponible en:  
<https://inevap.org.mx/evaluaciones>







### Resumen ejecutivo

La fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las funciones y servicios públicos a cargo de los municipios, entre los cuales se encuentra la dotación de agua potable, drenaje y saneamiento. Cada municipio moviliza actores y recursos para cumplir con este mandato por medio de los organismos operadores de agua.

En el municipio de Peñón Blanco, el organismo que se encarga del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento se creó en el 2012 bajo el nombre de Sistema de Agua de Peñón Blanco (SAP). Desde entonces, cumple con las atribuciones que establecen los artículos 34 y 41 de la Ley de Agua para el Estado de Durango (LAED).

Esta evaluación se enfoca en analizar y valorar la eficiencia del organismo operador en dos vertientes: eficiencia física, entendida como la capacidad para llevar el agua hasta los usuarios con las menores pérdidas de líquido en la red de distribución; y eficiencia comercial, que refleja los avances de la política tarifaria y de cobro del organismo pues mide la relación entre lo facturado y recaudado por la venta del servicio de agua potable.

La evaluación busca explicar la brecha entre los resultados de eficiencia esperados y alcanzados mediante la interpretación y valoración de la documentación del organismo operador y las entrevistas con sus responsables, así como la evidencia relacionada con el logro de sus objetivos. Al final, la evaluación ofrece alternativas para aumentar la calidad de la gestión del organismo, incrementar su eficiencia y mejorar el servicio que ofrece a la población.

### Principales hallazgos

**El organismo operador de agua del municipio de Peñón Blanco desconoce su nivel de eficiencia física, que es una brecha de información para determinar las posibles pérdidas asociadas.** Dada la falta de instrumentos de macro y micro medición en las fuentes de abastecimiento, redes de distribución y tomas de agua, es imposible calcular la eficiencia física del SAP y el tamaño de las pérdidas físicas en la conducción y distribución del agua.

Asimismo, el SAP conoce ambigualmente las características y capacidad de su infraestructura para extraer, almacenar y distribuir el agua, mientras que las acciones de mantenimiento, mejora y ampliación enfrentan fuertes restricciones presupuestales, humanas y materiales.

**El nivel de eficiencia comercial del organismo operador de agua del municipio de Peñón Blanco no puede calcularse ya que faltan datos sobre la facturación y recaudación.** El SAP desconoce el importe del agua consumido, facturado y recaudado, lo cual imposibilita el cálculo de la eficiencia comercial del organismo y las pérdidas de la facturación y cobranza asociadas.





Evaluación Específica del Sistema de Agua de Peñón  
PAE 2020

Además, todas las tomas de agua en el municipio de Peñón Blanco tienen la modalidad de cobro de cuota fija lo cual tiene implicaciones ambientales por la tendencia de los usuarios a ser menos cuidadosos con el agua; y económicos, por las posibles pérdidas en el cobro derivado de las imprecisiones en la estimación de los consumos. Igualmente, el padrón de usuarios del SAP contiene poca información sobre las características y comportamiento de los usuarios y sus tomas, lo cual limita su utilidad como fuente de información para la medición de consumos, facturación y recaudación del organismo.

#### *Conclusión y valoración final*

El principal desafío del SAP es desconocer sus niveles de eficiencia física y comercial pues carece de datos sobre el volumen del agua producido, distribuido y consumido en el municipio, y el importe facturado y recaudado por el cobro del servicio.

La gestión del organismo operador debe, ineludiblemente, comenzar a medir desempeño mediante indicadores que se acompañen de mecanismos para generar la información necesaria para calcularlos y monitorearlos constantemente, sobre todo en términos la eficiencia física, comercial y global. Si el SAP avanza al respecto, tendrá más información sobre las posibles pérdidas asociadas a sus procesos técnicos, operativos y administrativos para tomar decisiones de mejora.

#### *Propuesta de recomendaciones y observaciones*

La evaluación finaliza con serie de recomendaciones que son vías de mejora de la eficiencia del organismo operador relacionadas con elementos operativos, técnicos y comerciales.

En particular, el SAP puede avanzar si desarrolla e implementa instrumentos de medición del desempeño, ejecuta la macro y micro medición, configura un plan de acción para el mantenimiento, mejora y ampliación de la infraestructura, mejora la redacción y documentación de la contratación del servicio, mejora el contenido del padrón de usuarios, ~~define los mecanismos y criterios para la asignación de los descuentos, actualiza su documentación organizacional y fortalece su estrategia de cultura del agua.~~

Para cada una de las alternativas mencionadas, el informe de evaluación recomienda acciones puntuales para alcanzarlas. La decisión sobre qué opciones implementar es exclusiva del organismo operador, por lo que la pertinencia de la elección del municipio queda a escrutinio de la población. La evaluación es apenas un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que documenta los retos y oportunidades del municipio respecto de la gestión del servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento.



Evaluación Específica del Sistema de Agua de Peñón  
PAE 2020



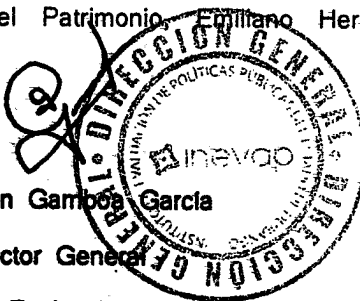
En la ciudad de Durango, Durango siendo las 11:33 once horas con treinta y tres minutos del día (30) treinta de octubre de 2020 de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, **HACE CONSTAR Y CERTIFICA** que el documento consiste en ( 3 ) tres páginas útiles impresas al anverso y reverso, denominado Evaluación específica del Sistema de Agua de Peñón Blanco, corresponde con el texto aprobado por el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango por **UNANIMIDAD** de votos, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el 30 de octubre del presente año, situación que certifica para los efectos legales conducentes.- Consejero Presidente, Juan Gamboa García; Consejera Secretaria Ejecutiva, Isaura Leticia Martos González; Consejero Administrador del Patrimonio, Emiliano Hernández Camargo; Rúbricas.

Mtro. Juan Gamboa García

Director General

del Instituto de Evaluación de Políticas

Públicas del Estado de Durango.





En cumplimiento del artículo 25 numeral 6 de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, se publica el resultado de la:

## Evaluación específica del Sistema de Agua de Canatlán en el municipio de Canatlán

Informe completo disponible en:  
<https://inevap.org.mx/evaluaciones>





Evaluación específica del Sistema del Agua de  
Canatlán en el municipio de Canatlán  
PAE 2020

### Resumen ejecutivo

El desempeño de los organismos operadores de agua usualmente se mide en función de su eficiencia física y comercial. La primera se entiende como la capacidad para perder la menor cantidad de líquido posible en la red de distribución, dado el ciclo urbano del agua. La eficiencia comercial se refiere al porcentaje que se recupera de la facturación que se ha determinado a los usuarios.

El diseño de la evaluación específica de la eficiencia del organismo operador de agua en el municipio hecha por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) parte del enfoque formativo de la evaluación y obedece a un paradigma pragmático orientado al uso de los resultados del ejercicio evaluativo. En particular el objetivo de la evaluación es valorar la eficiencia del organismo operador de agua e identificar los factores que pudieran limitarla.

Igualmente, la evaluación busca evidenciar si las estrategias de eficiencia física y comercial del organismo operador de agua contribuyen a disminuir pérdidas en la red de distribución y a aumentar su recaudación.

Las hipótesis que guían la evaluación específica de la eficiencia del organismo operador de agua en el municipio derivan del encuentro de las necesidades de información y los requerimientos de la intervención para alcanzar sus resultados. Estas hipótesis se vinculan con los objetivos y secciones de la evaluación, y apoyan la configuración de su resumen ejecutivo.

El organismo operador de agua del municipio de Canatlán se creó en 1997 bajo el nombre de Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Canatlán<sup>1</sup>. Desde entonces, este organismo cumple con las funciones que le otorgan los artículos 34 y 41 de la Ley de Agua para el Estado de Durango (LAED).

En 2009, el ayuntamiento de Canatlán modificó la denominación del organismo operador de agua a Sistema del Agua de Canatlán (SIAC). Este cambio contempló la estructura del artículo 47 de la LAED: consejo directivo, director general, comisario y consejo consultivo. Estos actores se encargan de la administración y gobernanza del organismo operador. Para formalizar esta estructura, el ayuntamiento aprobó en 2014 el Reglamento Interno del SIAC y se establecieron las facultades y obligaciones de sus funcionarios y la competencia de las unidades administrativas que lo integran.

La evaluación de la eficiencia física y comercial del organismo operador de agua del municipio de Canatlán señala el tamaño de su desafío para garantizar la continuidad, calidad y seguridad el servicio de agua potable con sostenibilidad financiera y compromiso

<sup>1</sup> Decreto No. 334 del 10 de septiembre de 1997, por medio de la cual se crea el organismo público descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio Canatlán, Durango, publicado en el Periódico Oficial No. 22 del 14 de septiembre de 1997.



Evaluación específica del Sistema del Agua de  
Canatlán en el municipio de Canatlán  
PAE 2020

ambiental. Las estrategias de eficiencia física y comercial del SIAC contribuyen muy poco a disminuir pérdidas en la red de distribución y a aumentar su recaudación.

**El organismo operador SIAC cuenta con una eficiencia física muy debilitada que contribuye muy poco a disminuir pérdidas de agua.** La brecha de la eficiencia física del organismo operador significa que existen grandes oportunidades para disminuir las pérdidas asociadas a la conducción y distribución del agua. La ruta de mejora en este aspecto es la configuración de un proyecto que identifique, corrija y evite las fugas de agua con un horizonte de implementación, fuentes de financiamiento y metas de avance documentadas, principalmente, el establecimiento de mecanismos de macro medición. Los beneficios de la mejora de la eficiencia física del organismo operador abarcan el tema ambiental y económico, pues se cuidan las fuentes naturales de abastecimiento y se ejerce menos presión sobre los recursos del organismo para satisfacer la demanda de agua.

**El organismo operador SIAC cuenta con una estrategia muy debilitada de eficiencia comercial que no le permite cubrir sus costos operativos.** Las debilidades que la evaluación identifica en los subsistemas comerciales ponen en riesgo la eficiencia comercial. Para fortalecer la comercialización del organismo operador, es indispensable aumentar la confiabilidad del padrón de usuarios del servicio, implementar mecanismos de micro medición, al menos, en los usuarios que representan mayor consumo, como el comercial e industrial. El organismo también puede avanzar en la mejora de la asignación de los subsidios y disminuir la tasa de morosidad y cartera vencida; además de ajustar la tarifa del servicio que garantice su viabilidad económica.

Hacia adelante, la gestión del organismo operador debe plantearse la prioridad ineludible de aumentar la eficiencia, tanto física como comercial, al tiempo que asume los costos financieros y políticos necesarios y cubre los requerimientos de los subsistemas comerciales para lograrlo.

Con todo, el organismo operador de agua debe poner a la población al centro de todas sus estrategias. El objetivo en este servicio público vincula las capacidades técnicas, operativas, administrativas y organizacionales del organismo operador para que toda la población reciba agua suficiente y de calidad, que el servicio sea seguro en el presente y futuro, proteja el medio ambiente desde el suministro hasta la descarga y mantenga la asequibilidad del agua para todos. Al final, el cambio positivo de la eficiencia del organismo operador debe estar definido por las prioridades de la población.



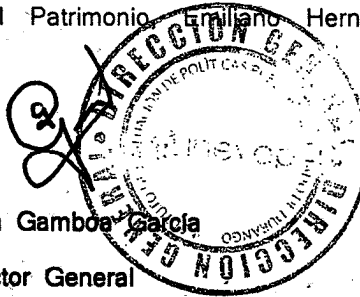


En la ciudad de Durango, Durango siendo las (11:33) once horas con treinta y tres minutos del día (30) treinta de octubre de (2020) de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, **HACE CONSTAR Y CERTIFICA** que el documento consiste en (3) tres páginas útiles impresas al anverso y reverso, denominado Evaluación específica del Sistema del Agua de Canatlán en el municipio de Canatlán, corresponde con el texto aprobado por el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango por **UNANIMIDAD** de votos, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el 30 de octubre del presente año, situación que certifica para los efectos legales conducentes.- Consejero Presidente, Juan Gamboa García; Consejera Secretaria Ejecutiva, Isaura Leticia Martos González; Consejero Administrador del Patrimonio, Emiliano Hernández Camargo; Rúbricas.

Mtro. Juan Gamboa García

Director General

del Instituto de Evaluación de Políticas  
Públicas del Estado de Durango.





En cumplimiento del artículo 25 numeral 6 de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, se publica el resultado de la:

**Evaluación específica del Sistema  
Descentralizado de Agua Potable y  
Saneamiento de Pueblo Nuevo en el  
municipio de Pueblo Nuevo**

**Informe completo disponible en:  
<https://inevap.org.mx/evaluaciones>**







Evaluación específica del Sistema Descentralizado de  
Agua Potable y Saneamiento de Pueblo Nuevo en el  
municipio de Pueblo Nuevo  
PAE 2020

### Resumen ejecutivo

El desempeño de los organismos operadores de agua usualmente se mide en función de su eficiencia física y comercial. La primera se entiende como la capacidad para perder la menor cantidad de líquido posible en la red de distribución, dado el ciclo urbano del agua. La eficiencia comercial se refiere al porcentaje que se recupera de la facturación que se ha determinado a los usuarios.

El diseño de la evaluación específica de la eficiencia del organismo operador de agua en el municipio hecha por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) parte del enfoque formativo de la evaluación y obedece a un paradigma pragmático orientado al uso de los resultados del ejercicio evaluativo. En particular el objetivo de la evaluación es valorar la eficiencia del organismo operador de agua e identificar los factores que pudieran limitarla.

El organismo operador de agua del municipio de Pueblo Nuevo se creó en 1997 bajo el nombre de Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Pueblo Nuevo<sup>1</sup>. Desde entonces, este organismo cumple con las funciones que le otorgan los artículos 34 y 41 de la Ley de Agua para el Estado de Durango (LAED). El organismo operador de Agua da servicio a las localidades: El Salto, La Ciudad, La Campana, Corralitos, Coyotes, La Peña, Mil Diez y San Esteban. Pueblo Nuevo tiene aproximadamente 50,417 habitantes, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y con la información más oportuna del Censo de Población y Vivienda 2010 de Inegi, la localidad El Salto concentra el 50% de la población total de Pueblo Nuevo. Se estima que el organismo operador de agua de Pueblo Nuevo da servicio al 60% de la población de Pueblo Nuevo.

La organización del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Pueblo Nuevo (Sideapas) sigue la estructura del artículo 47 de la LAED: consejo directivo, director general, comisario y consejo consultivo. Estos actores se encargan de la administración y gobernanza del organismo operador. Para formalizar esta estructura, el H Ayuntamiento recientemente aprobó el Reglamento Interno del organismo operador del agua y su denominación a Aguas del Municipio de Pueblo Nuevo (AMPN) y se establecieron las facultades y obligaciones de sus funcionarios y la competencia de las unidades administrativas que lo integran.

La evaluación de la eficiencia física y comercial del organismo operador de agua del municipio de Pueblo Nuevo señala el tamaño de su desafío para garantizar la continuidad, calidad y seguridad el servicio de agua potable con sostenibilidad financiera y compromiso

<sup>1</sup> Decreto No. 308 del 11 de junio de 1997, por medio de la cual se crea el organismo público descentralizado de Agua Potable del municipio Pueblo Nuevo, Durango, publicado en el Periódico Oficial No. 47 del 12 de junio de 1997.



Evaluación específica del Sistema Descentralizado de  
Agua Potable y Saneamiento de Pueblo Nuevo en el  
municipio de Pueblo Nuevo  
PAE 2020

ambiental. Las estrategias de eficiencia física y comercial del Sideapas contribuyen muy poco a disminuir pérdidas en la red de distribución y a aumentar su recaudación.

**El organismo operador Sideapas cuenta con una eficiencia física muy debilitada que contribuye muy poco a disminuir pérdidas de agua.** La brecha de la eficiencia física del organismo operador significa que existen grandes oportunidades para disminuir las pérdidas asociadas a la conducción y distribución del agua. La ruta de mejora en este aspecto es la configuración de un proyecto que identifique, corrija y evite las fugas de agua con un horizonte de implementación, fuentes de financiamiento y metas de avance documentadas, principalmente, el establecimiento de mecanismos de macro medición. Los beneficios de la mejora de la eficiencia física del organismo operador abarcan el tema ambiental y económico, pues se cuidan las fuentes naturales de abastecimiento y se ejerce menos presión sobre los recursos del organismo para satisfacer la demanda de agua.

**El organismo operador Sideapas cuenta con una estrategia muy debilitada de eficiencia comercial que no le permite cubrir sus costos operativos.** Las debilidades que la evaluación identifica en los subsistemas comerciales ponen en riesgo la eficiencia comercial. Para fortalecer la comercialización del organismo operador, es indispensable aumentar la confiabilidad del padrón de usuarios del servicio, implementar mecanismos de micro medición, al menos, en los usuarios que representan mayor consumo, como el comercial e industrial. El organismo también puede avanzar en la mejora de la asignación de los subsidios y disminuir la tasa de morosidad y cartera vencida; además de ajustar la tarifa del servicio que garantice su viabilidad económica.

Hacia adelante, la gestión del organismo operador debe plantearse la prioridad ineludible de aumentar la eficiencia, tanto física como comercial, al tiempo que asume los costos financieros y políticos necesarios y cubre los requerimientos de los subsistemas comerciales para lograrlo.

Con todo, el organismo operador de agua debe poner a la población al centro de todas sus estrategias. El objetivo en este servicio público vincula las capacidades técnicas, operativas, administrativas y organizacionales del organismo operador para que toda la población reciba agua suficiente y de calidad, que el servicio sea seguro en el presente y futuro, proteja el medio ambiente desde el suministro hasta la descarga y mantenga la asequibilidad del agua para todos. Al final, el cambio positivo de la eficiencia del organismo operador debe estar definido por las prioridades de la población.

9



En la ciudad de Durango, Durango siendo las (11:33) once horas con treinta y tres minutos del día (30) treinta de octubre de (2020) de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, **HACE CONSTAR Y CERTIFICA** que el documento consiste en (3) tres páginas útiles impresas al anverso y reverso, denominado Evaluación específica del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento de Pueblo Nuevo en el municipio de Pueblo Nuevo, corresponde con el texto aprobado por el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango por **UNANIMIDAD** de votos, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el 30 de octubre del presente año, situación que certifica para los efectos legales conducentes.- Consejero Presidente, Juan Gamboa García; Consejera Secretaria Ejecutiva, Isaura Leticia Martos González; Consejero Administrador del Patrimonio, Emiliano Hernández Gamboa. **Rubricas.**

Mtro. Juan Gamboa García

Director General

del Instituto de Evaluación de Políticas  
Públicas del Estado de Durango.



En cumplimiento del artículo 25 numeral 6 de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, se publica el resultado de la:

## Evaluación de desempeño del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en el municipio de Durango

Informe completo disponible en:  
<https://inevap.org.mx/evaluaciones>





Evaluación de desempeño del Programa de  
Fortalecimiento para la Seguridad en el municipio de  
Durango  
PAE 2020

### Resumen ejecutivo

La evaluación se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la fracción I del artículo 85, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el estado, por los artículos 47, 130 y 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y artículos 1, 3 y 4 de la Ley que Crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango.

El artículo 21 de la CPEUM dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como las infracciones administrativas.

Una de las atribuciones constitucionales de los municipios es la seguridad pública para procurar el desarrollo del bienestar social dentro del Estado de Derecho. Para dar cumplimiento a lo anterior, una selección de 300 municipios son beneficiarios del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG).

El objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Particularmente, en el marco del FORTASEG 2019, los municipios beneficiarios pudieron destinar recursos a los proyectos de los subprogramas Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza.

En general, el desempeño de la gestión del FORTASEG es satisfactorio alrededor de su propia administración, resultados y rendición de cuentas, aunque existen algunas áreas de oportunidad para el municipio de Durango y sus actores involucrados.

**La gestión del FORTASEG permite identificar el destino de las aportaciones hacia los objetivos de los Programas de Prioridad Nacional.** El municipio de Durango recibió en el ejercicio fiscal 2019 un total de \$27,623,839.20, de los cuales, \$23,019,866.00 fue la aportación del subsidio federal y \$4,603,973.20 de participación municipal, con el objeto de fortalecer el desempeño de las funciones que realizan los elementos de seguridad pública. Estos recursos fueron destinados a cinco programas de Prioridad Nacional: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia; Red Nacional de Radiocomunicación; y Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial: Coparticipación.



Evaluación de desempeño del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en el municipio de Durango  
PAE 2020

### Gráfica 1.

#### Distribución de los recursos del municipio de Durango por Programa de Prioridad Nacional, 2019.

Porcentaje



Fuente: Informe de Evaluación del FORTASEG 2019.

**El municipio identifica débilmente los procesos clave de la gestión del FORTASEG, así como sus potenciales factores de desviación.** No se encontró evidencia que el municipio cuente con procesos documentados que incluyan estos hitos de la gestión del FORTASEG. Más aún, a dos eventos de evaluación del FORTASEG en el municipio de Durango (ejercicio fiscal concluido 2018 y 2019), los responsables de la gestión no han acreditado todavía los Aspectos Susceptibles de Mejora comprometidos para la documentación de la gestión del subsidio dentro del municipio. Se entendería que el proceso global de la gestión del subsidio para el municipio debería incluir al menos, procedimientos documentados para: I. Gestionar primera ministración del FORTASEG; II. Gestionar segunda ministración del FORTASEG; III. Realizar adecuaciones de carácter presupuestario; y IV. Preparar y realizar el cierre del ejercicio fiscal del FORTASEG. Esta evaluación incluye modelos de diagramas y procedimientos para cada uno de los hitos en la gestión del FORTASEG que pudieran servir de ayuda a los involucrados en la gestión a controlar las actividades inherentes al ejercicio de los recursos del FORTASEG.

#### **Las capacitaciones financiadas con el FORTASEG contribuyen al logro de sus objetivos.**

Se reconoce que la Dirección de Academia de Policía Preventiva y Vial de la DMSP conoce y recopila los expedientes de los elementos operativos, al estilo de un kárdex, de todos los cursos que ha acreditado el policía municipal. De esta manera, la Academia está en condiciones de determinar los cursos y capacitaciones en función de las brechas existentes en la formación y profesionalización de los miembros operativos de seguridad. El municipio de Durango, a través de la DMSP, cuenta con información detallada de las acciones de capacitación y profesionalización. Durante 2019, se financiaron evaluaciones de competencias y de desempeño a policías municipales para conocer la efectividad de los cursos y eventos de capacitación para fortalecer la función policial. De acuerdo con los

9x



Evaluación de desempeño del Programa de  
Fortalecimiento para la Seguridad en el municipio de  
Durango  
PAE 2020

registros del ejercicio del FORTASEG 2019 en la DMSP, todos los elementos que tomaron los cursos aprobaron las evaluaciones respectivas. Por otro lado, la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial en el municipio de Durango ha avanzado de manera intermitente. En primera instancia, la DMSP reconoce que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de Durango actual se ha quedado rezagado a las necesidades del nuevo Modelo Nacional de Policía. Durante 2019, la DMSP no utilizó recursos para actualizar y configurar los documentos que enmarcarían un Servicio Profesional de Carrera Policial más moderno. A la fecha de este documento, la DMSP ha iniciado con recurso propios una jornada de actualización del marco normativo del Servicio Profesional de Carrera Policial que ha incluido la configuración de un nuevo reglamento, y de todos los manuales, catálogos y protocolos necesarios para iniciar la implementación. La DMSP ha planteado como meta que, a más tardar en febrero de 2021, el Servicio Profesional de Carrera Policial inicie funciones y operaciones.

**La gestión del FORTASEG identifica sus principales indicadores y los reporta.** La gestión del FORTASEG 2019 se ha acompañado de los indicadores establecidos desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FORTASEG, para registrar avances del programa. Al mismo tiempo, la gestión local del FORTASEG ha utilizado los formatos determinados por el SESNSP para reportar los avances en función de las metas físicas y financieras comprometidas en el Anexo Técnico del Convenio de Adhesión. También, se encontró evidencia de que el municipio, a través de su Programa Anual de Trabajo 2019, utiliza indicadores para algunos componentes, dimensiones y estrategias que derivan del FORTASEG 2019. Por otro lado, la DMSP ha asimilado indicadores sobre el desempeño de la función policial alrededor del respeto a los derechos humanos. Durante 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró 103 quejas que señalaron a la DMSP por violación de derechos humanos, principalmente, en detención arbitraria, en comparación con el año anterior, en el cual, se registraron 112 quejas; es decir, una disminución del 8%. No obstante, se advierte que existen todavía oportunidades para mejorar la función policial alrededor de ellos derechos humanos. Es un avance que el municipio haya asimilado que la métrica del comportamiento de su estado de fuerza en derechos humanos sea vigilado de manera oficial. Debe reconocerse que el desempeño del FORTASEG en el municipio no necesariamente debe medirse solo por los resultados de la incidencia delictiva. A lo sumo, el FORTASEG financia solo algunas de las actividades de seguridad pública a cargo de la DMSP; no obstante, los resultados de incidencia delictiva deberían utilizarse para plantear las prioridades del destino de los recursos del FORTASEG.

Para que la gestión del FORTASEG en el municipio de Durango mejore, se recomienda lo siguiente:

- Documentar los principales procesos de gestión del FORTASEG.
- Avanzar hacia la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial.
- Mejorar los indicadores contemplados en el Programa Anual de Trabajo del municipio alrededor de la función policial y de los resultados de la incidencia delictiva.





Evaluación de desempeño del Programa de  
Fortalecimiento para la Seguridad en el municipio de  
Durango  
PAE 2020

- Considerar en siguiente ejercicio la evaluación del Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
- Participar en proyectos de la Bolsa de Recursos Concursable del FORTASEG.
- Continuar la estrategia de capacitación y evaluación hacia la certificación de los policías.
- Acreditar que al menos del 95% del estado de fuerza cuenten con el Certificado Único Policial.

6



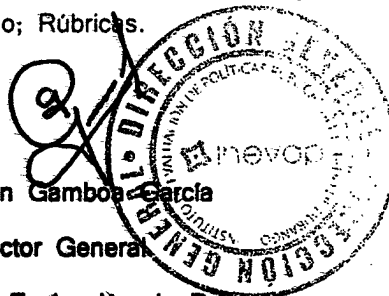


En la ciudad de Durango, Durango siendo las (11:33) once horas con treinta y tres minutos del día (30) treinta de octubre de (2020) de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, **HACE CONSTAR Y CERTIFICA** que el documento consiste en (5) cinco páginas útiles impresas al anverso y reverso, denominado Evaluación de desempeño del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad en el municipio de Durango, corresponde con el texto aprobado por el Consejo General del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango por **UNANIMIDAD** de votos, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el 30 de octubre del presente año, situación que certifica para los efectos legales conducentes.- Consejero Presidente, Juan Gamboa García; Consejera Secretaria Ejecutiva, Isaura Leticia Martos González; Consejero Administrador del Patrimonio, Emiliano Hernández Camargo; Rúbricas.

Mtro. Juan Gamboa García

Director General

del Instituto de Evaluación de Políticas  
Públicas del Estado de Durango.



# RELACIÓN

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango así como en los artículos 28 fracción II y 30 fracción XXI, 53 y 55 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado, hago publica la relación de Entidades Paraestatales agrupadas por sectores de actividad con cada secretaría de ramo cuya competencia es afín y que funge como coordinadora de sector, en lo que respecta a su operación, control, vigilancia y evaluación.

**RELACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
AGrupADAS POR SECTOR**

DENOMINACIÓN	SIGLAS	SECTORIZADO
BEBELECHE, MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO	BEBELECHE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO	COBAED	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO	CONALEP	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO	CECYTED	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE DURANGO	COCYTED	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO	ICED	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	IDEA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS	ITSRL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO, DGO.	ITSL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO	ITSSMO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO	ITSSP	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA	SETEL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO	UPD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO	UNIPOLI-DGO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO	UNIPOLI-GÓMEZ	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUENCAMÉ	UNIPOLI-CUENCAMÉ	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO	UTD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO	UTL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL	UTM	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS	UTP	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



DENOMINACIÓN	SIGLAS	SECTORIZADO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE RODEO	UTR	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA	UTT	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO	BYCENED	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE DURANGO	IPDED	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	CAED	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO	INIFEED	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	IEM	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO	COESVI	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD	IDJ	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE DURANGO	DPE	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	SSD	SECRETARÍA DE SALUD
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO	DIF	SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO	CCB	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
FERIAS, ESPECTÁCULOS Y PASEOS TURÍSTICOS DE DURANGO	FERIAS	SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN	SESLA	NO SECTORIZADO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECESP	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	CEEAV	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
INSTITUTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL MIGRANTE Y SU FAMILIA	IAPMF	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO	SIPINNA	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL ESTADO DE DURANGO	SRYTED	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE DURANGO	PROPAED	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



## RELACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO AGRUPADAS POR SECTOR

DENOMINACIÓN	SIGLAS	SECTORIZADO
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE DURANGO	PRODEFOR	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
FIDEICOMISO AMBIENTAL DURANGUENSE	FAD	SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE MANUTENCIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	MANUTENCIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FIDEICOMISO TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE DURANGO	FOAPES	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE DURANGO	FOFAE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
FIDEICOMISO FONDO ESTATAL DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DEL FRIJOL EN EL ESTADO DE DURANGO	FEAFRID	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE DURANGO	FOGADES	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL ESTADO DE DURANGO	HOSPEDAJE DURANGO	SECRETARÍA DE TURISMO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO	HOSPEDAJE GÓMEZ PALACIO	SECRETARÍA DE TURISMO
FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL MUNICIPIO DE LERDO	HOSPEDAJE LERDO	SECRETARÍA DE TURISMO
FIDEICOMISO CASA- HOGAR DIF	CASA HOGAR DIF	SECRETARÍA DE SALUD
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO PARA BECAS Y APOYOS DEPORTIVOS CHELITO ZAMORA	CHELITO ZAMORA	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
FIDEICOMISO PÚBLICO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO	FOPRODEM-DGO	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO	FOPRODEM-GÓMEZ	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN	SIGLAS	SECTORIZADO
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE DURANGO	FCID	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA	FONMETRO	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
FIDEICOMISO FONDO DURANGO	FONDO DURANGO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO LOGÍSTICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE DURANGO	CLID	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
FIDEICOMISO DEL ESTADO DE DURANGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	FISJP	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO Y SUS ESCUELAS ANEXAS	FOVI	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Derivado de los ajustes presupuestales en el Estado y en atención a lo establecido en los Lineamientos Generales que establecen Medidas de Austeridad, Disciplina, Eficiencia, y Transparencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Durango, así como el artículo 17 y 60 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango, se procederá al análisis de cada entidad paraestatal con el fin de determinar en cada caso en específico si es procedente la disolución, liquidación o extinción.

ATENTAMENTE  
VICTORIA DE DURANGO, DGO. 03 DE NOVIEMBRE DE 2020  
SECRETARIO DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN  
DEL ESTADO DE DURANGO

C.P. JESÚS ARTURO DIAZ MEDINA

# SENTENCIA

JUICIO AGRARIO: 22/1998  
POBLADO: FRANCISCO MONTES DE OCA  
MUNICIPIO: DURANGO  
ESTADO: DURANGO  
ACCIÓN: TERCERA AMPLIACIÓN DE EJIDO  
POR INCORPORACIÓN DE  
TIERRAS AL RÉGIMEN EJIDAL

**CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA**

**MAGISTRADA PONENTE: LIC. CARMEN LAURA LÓPEZ ALMARAZ**  
**SECRETARIO: LICENCIADO JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ**

México, Distrito Federal a veintiocho de enero de dos mil dieciséis

**VISTO** para resolver el juicio agrario número 22/1998, que corresponde al expediente administrativo sin número, relativo a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango; en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 345/2000, por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Durango, de fecha veintiocho de agosto de dos mil; y



**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Por Resolución Presidencial de veintisiete de octubre de mil novecientos treinta y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de febrero de mil novecientos treinta y tres, se concedió por concepto de dotación de tierras al poblado denominado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango, una superficie total de 160-00-00 (ciento sesenta hectáreas); se ejecuto el veinticuatro de febrero de mil novecientos treinta y cuatro.

**SEGUNDO.** Mediante Resolución Presidencial de quince de julio de mil novecientos treinta y seis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de octubre del mismo año, se concedió por concepto de ampliación de ejido al poblado de que se trata, una superficie de 966-80-00 (novecientas sesenta y seis hectáreas, ochenta



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

áreas), beneficiando a cuarenta y ocho campesinos capacitados; se ejecutó el veinticinco de febrero de mil novecientos treinta y siete.

**TERCERO.** Por Resolución Presidencial de dos de febrero de mil novecientos treinta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, se concedió por concepto de segunda ampliación de ejido al poblado señalado, una superficie de 602-00-00 (seiscientos dos hectáreas), para beneficiar a cuarenta y tres capacitados, ejecutándose parcialmente el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, con la entrega material de una superficie de 518-38-83 (quinientas dieciocho hectáreas, treinta y ocho áreas, ochenta y tres centiáreas).

**CUARTO.** Relacionado con lo anterior, al advertirse que existía imposibilidad jurídica y material para ejecutar de manera complementaria la resolución presidencial de segunda ampliación de ejido del poblado que nos ocupa, en una superficie de 83-61-17 (ochenta y tres hectáreas, sesenta y una áreas, diecisiete centiáreas), toda vez que diversos propietarios promovieron juicios de amparo en contra de la resolución presidencial que afectó predios de su propiedad, de los que conoció el Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con los números 319/79, 330/79, 347/79, 358/79, 359/79, 365/79, 367/79, 380/79, 381/79 y 432/79, de los que por auto de once de mayo de mil novecientos setenta y nueve, se decretó su acumulación al primero de los mencionados.

Estos juicios de amparo se resolvieron el veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, sobreseyendo en una parte, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Ramón Pérez Gavilán y Salvador Dorado Chávez, quienes promovieron los juicios de garantías números 319/79 y 330/79, para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la República

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

dejara insubsistente el fallo reclamado, sólo en cuanto a la afectación de los predios denominados "Potrero de Casas de Alto", con superficies de 98-01-95 (noventa y ocho hectáreas, un área, noventa y cinco centiáreas) y fracción del "Potrero de San Miguel", con superficie de 17-68-33 (diecisiete hectáreas, sesenta y ocho áreas, treinta y tres centiáreas), por estar amparados con Certificados de Inafectabilidad Agrícola números 60189 y 108764, que suman ambos una superficie de 115-70-28 (ciento quince hectáreas, setenta áreas, veintiocho centiáreas).

La anterior resolución se vio confirmada en la ejecutoria dictada en el toca en revisión número 2482/81, de fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y tres, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, por una parte sobreseyó los juicios de amparo, y por otra, concedió la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Ramón Pérez Gavilán y Salvador Dorado Chávez, para que no sean privados de los predios de su propiedad amparados por los Certificados de Inafectabilidad Agrícola números 60189 y 108764; sin perjuicio de que el Presidente de la República, previa tramitación del procedimiento correspondiente, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, resuelva lo que en derecho proceda acerca de la subsistencia o insubsistencia jurídica de los de los acuerdos y los certificados de inafectabilidad referidos.

**QUINTO.** El Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen el veinte de septiembre de mil novecientos noventa, considerando improcedente declarar la Nulidad de los Acuerdos Presidenciales y Cancelación de los Certificados de Inafectabilidad números 60189 y 108764, que protegen a los predios denominados "Potrero de las Casas de Alto", con superficies de 98-01-95 (noventa y ocho hectáreas, un área, noventa y cinco centiáreas) y "Fracción del Potrero de San Miguel", con superficie de 17-68-33 (diecisiete hectáreas, sesenta y ocho áreas, treinta y tres centiáreas), ubicados en el municipio y

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

estado de Durango, propiedad de la sucesión de la señora María Elena Wigand de Gavilán, y de la señora Rosa Contreras.

**SEXTO.** Derivado de lo anterior, la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, con la finalidad de evitar un conflicto social suscitado con motivo de la ejecución de resoluciones presidenciales, celebró un convenio el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, con los representantes de diversos núcleos de población denominados "Francisco Montes de Oca" y "José María Pino Suárez", en relación con su segunda ampliación de ejido, y con el poblado "Boca del Mezquital" en cuanto a su dotación de tierras, todos ubicados en el municipio y estado de Durango.

De la declaración segunda del convenio señalado, se desprende que los representantes de los núcleos agrarios referidos, fueron autorizados por sus respectivas asambleas generales para celebrar el presente convenio, que se realizaron el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y tres.

En la declaración tercera se establece que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, se compromete a otorgar un apoyo económico a los poblados señalados, por un monto equivalente a N\$ 3'206,325.53 (Tres millones doscientos seis mil trescientos veinticinco nuevos pesos 53/100 M.N.), para la adquisición de una superficie total de 1,022-47-74 (mil veintidós hectáreas, cuarenta y siete áreas, setenta y cuatro centiáreas), proveniente de diversos lotes de terreno de los predios de propiedad particular denominados "Boca del Mezquital y El Bagre", también conocidos como "Santa Anita", ubicados en el municipio de Durango, estado de Durango.

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

En la misma declaración tercera, se consigna de manera expresa la forma que se distribuiría la anterior superficie, en los términos siguientes: al poblado "Francisco Montes de Oca", la superficie de 225-95-80 (doscientas veinticinco hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas); al poblado "José María Pino Suárez", 555-73-04 (quinientas cincuenta y cinco hectáreas, setenta y tres áreas, cuatro centiáreas) y al poblado "Boca del Mezquital", una superficie de 240-78-90 (doscientas cuarenta hectáreas, setenta y ocho áreas, noventa centiáreas).

También se precisa que la superficie que se destina al poblado "Francisco Montes de Oca", que consta de 225-95-80 (doscientas veinticinco hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas), se integrará en la forma siguiente: del predio denominado "Boca del Mezquital": "Lote 6", propiedad de Francisco Amador Bañuelos, con superficie de 20-22-45 (veinte hectáreas, veintidós áreas, cuarenta y dos centiáreas); "Lote 20", propiedad de Valentín Díaz Avalos, con superficie de 10-00-08 (diez hectáreas, ocho centiáreas); "Lote 40", propiedad de Teresa Castillo Salas, con superficie de 25-28-07 (veinticinco hectáreas, veintiocho áreas, siete centiáreas); "Lote 25", propiedad de Ana María Castillo Salas, con superficie de 27-02-84 (veintisiete hectáreas, dos áreas, ochenta y cuatro centiáreas); "Lote 12", propiedad de Jorge Castillo Salas, las superficies de 5-00-00 (cinco hectáreas) y 49-73-88 (cuarenta y nueve hectáreas, setenta y tres áreas, ochenta y ocho centiáreas).

Del predio "El Bagre", los lotes 41, 1 y 34, propiedad de la sucesión a bienes de Ángel Ávila Ramírez, con superficie de 10-00-00 (diez hectáreas) cada uno; de la fracción segregada del "Lote 16", propiedad de José Vázquez Martínez, una superficie de 10-00-00 (diez hectáreas); "Lote 14", propiedad de Remigio Torres Acuña, con superficie de 10-00-14 (diez hectáreas, catorce centiáreas); "Lote 15", propiedad de Hipólito García Cabrera, con superficie de 10-00-00 (diez

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

hectáreas); "Lote 10", propiedad de la sucesión a bienes de Jesús Díaz Herrera, con superficie de 10-00-00 (diez hectáreas); "Lote 32", propiedad de Juan Francisco Meza Sánchez, con superficie de 10-00-14 (diez hectáreas, catorce centiáreas), y del "Lote 24", propiedad de Ángel Ávila Castillo, con superficie de 8-68-20 (ocho hectáreas, sesenta y ocho áreas, veinte centiáreas).

Se hace la aclaración que el fraccionamiento de los predios "Boca del Mezquital" y "El Bagre", también es conocido como "Santa Anita".

Del convenio de mérito se destacan y reproducen las cláusulas primera, segunda y tercera que a la letra señalan:

**"PRIMERA.- LA SECRETARÍA PARA RESOLVER EN DEFINITIVA LAS EJECUCIONES DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EN BASE A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 309 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA RESPECTO A LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE EJIDO DEL POBLADO 'FRANCISCO MONTES DE OCA', SEGUNDA AMPLIACIÓN DE EJIDO DEL POBLADO 'JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ' Y DOTACIÓN DE TIERRAS DEL POBLADO 'BOCA DEL MEZQUITAL', TODOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, ESTADO DE DURANGO, ENTREGA DE FORMA DIRECTA A LOS NÚCLEOS GESTORES LA CANTIDAD DE \$ 3'206,325.53 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO NUEVOS PESOS 53/100 M.N.), COMO APOYO ECONÓMICO SOLIDARIO, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA SUPERFICIE DE 1,022-47-74 HECTÁREAS QUE INTEGRAN LOS PREDIOS DEL FRACCIONAMIENTO 'BOCA DEL MEZQUITAL' Y EL BAGRE, UBICADOS EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE DURANGO, INCLUYENDO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUJETAS A LOS BIENES INMUEBLES Y NECESARIAS PARA SU EXPLOTACIÓN, LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN DE LA SIGUIENTE MANERA (...)**

**SEGUNDA.- LOS NÚCLEOS GESTORES ESTÁN DE ACUERDO EN RECIBIR LA CANTIDAD INDICADA Y LA RECIBEN DE CONFORMIDAD, PARA DESTINARLA A LOS FINES SEÑALADOS EN SU DECLARACIÓN TERCERA, EN LOS TÉRMINOS QUE ACORDARON LAS ASAMBLEAS DE LOS NÚCLEOS EN SU BENEFICIO; SUJETÁNDOSE A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.**

**TERCERA.- 'LOS NÚCLEOS AGRARIOS' ACEPTAN QUE CON LA CANTIDAD MENCIONADA QUEDAN SATISFECHOS EN SUS NECESIDADES AGRARIAS Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DAN POR CONCLUIDAS LAS EJECUCIONES DE LAS RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DE SEGUNDAS AMPLIACIONES DE EJIDO Y DE DOTACIÓN DE TIERRAS Y EL CONFLICTO SOCIAL SUSCITADO. RECONOCIENDO EXPRESAMENTE QUE HAN QUEDADO RESUELTAS LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES, EN VIRTUD DE LA**

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**IMPOSIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL POR PARTE DEL ESTADO PARA SU CUMPLIMIENTO.**

**CUARTA. LAS PARTES DECLARAN QUE EN LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO NO EXISTEN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, Y QUE RECONOCEN SU VALIDEZ Y DEFINITIVIDAD FRENTE A CUALQUIER AUTORIDAD, EQUIPARÁNDOLO A COSA JUZGADA...."**

**SÉPTIMO.** Por el motivo anterior, la Secretaría de la Reforma Agraria, con la asistencias de los representantes legales de las acciones de segunda ampliación de ejido y dotación de tierras de los poblados "Francisco Montes de Oca", "José María Pino Suárez" y "Boca del Mezquital", todos del municipio de Durango, de la misma entidad federativa, celebró un convenio el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres (obra en autos en copia certificada, 487-502-4870 I), con los propietarios de los diversos lotes de terreno provenientes de los predios denominados "Boca del Mezquital" y "El Baño", ubicados en el municipio y estado señalados, siendo los siguientes: Jorge Castillo Salas por su propio derecho y como apoderado legal de Francisco Amador Bañuelos, Valentín Díaz Avalos, Teresa Castillo Salas, Ana María Castillo Salas, Jorge Castillo Salas, sucesión a bienes de Ángel Avila Ramírez, José Vázquez Martínez, Remigio Torres Acuña, Hipólito García Cabrera, sucesión a bienes de Jesús Díaz Herrera, Juan Francisco Mesa Sánchez, Ángel Gabriel y Juan Ignacio de apellidos Ávila Castillo, quienes pusieron a disposición de esa Dependencia del Ejecutivo Federal, representada por su Oficial Mayor y el Director General de Asuntos Jurídicos, una superficie de 1,022-47-74 (mil veintidós hectáreas, cuarenta y siete áreas, setenta y cuatro centiáreas) de riego, temporal y agostadero, que se conforman por los lotes de terreno de su propiedad; lo anterior, para satisfacer las necesidades de tierras de los poblados antes citados.

En la declaración segunda del precitado convenio, la Secretaría de la Reforma Agraria, actuando con los representantes legales de los poblados referidos, se comprometió a entregar a los propietarios la cantidad de N\$ 3'206,325.53 (Tres millones doscientos seis mil

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

trescientos veinticinco nuevos pesos 53/100 M.N.), para la adquisición de una superficie total de 1,022-47-74 (mil veintidós hectáreas, cuarenta y siete áreas, setenta y cuatro centiáreas) de diversas calidades, de las que se expresa que 225-95-80 (doscientas veinticinco hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas), son para satisfacer las necesidades del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango, de acuerdo al diverso convenio de finiquito celebrado en la misma fecha con los representantes legales de los poblados que lo suscribieron; lo anterior, para dar solución al conflicto social surgido por la imposibilidad de ejecutar las resoluciones presidenciales de esos núcleos de población.

En las declaraciones de los "Propietarios" (I a XVIII), se tuvo acreditada la titularidad de sus respectivos lotes de terreno, con las escrituras de propiedad que exhibieron en ese acto, planos y los datos relativos a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

En las declaraciones I y II, la Secretaría de la Reforma Agraria, los representantes legales de los poblados de que se trata, así como los propietarios referidos, manifiestan que de común acuerdo para concluir en todos sus términos con el conflicto suscitado por la imposibilidad jurídica y material de ejecutar sus resoluciones presidenciales de segunda ampliación de ejido y dotación de tierras de los poblados "Francisco Montes de Oca", "José María Pino Suárez" y "Boca del Mezquital", ubicados en el municipio de Durango, de la misma entidad federativa, se someten a la celebración del presente convenio; por tal motivo esta dependencia federal junto con los poblados señalados, en ese momento, cubren por concepto de pago a los propietarios la cantidad de N\$ 3'206,325.53 (Tres millones doscientos seis mil trescientos veinticinco nuevos pesos 53/100 M.N.), para la adquisición de la superficie de 1,022-47-74 (mil veintidós

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

hectáreas, cuarenta y siete áreas, setenta y cuatro centiáreas), quienes por su parte pusieron a su disposición la superficie convenida.

Por su parte los propietarios, una vez que se les cubra el pago respectivo sobre sus lotes de terreno, ponen a disposición de la Secretaría de la Reformas Agraria y de los poblados señalados, los predios materia del presente convenio, renunciando a cualquier derecho que pudieran tener como consecuencia de la afectación de los inmuebles objeto del presente convenio, que realicen las autoridades agrarias.



En ese tenor, el convenio de mérito se suscribió de conformidad con las siguientes cláusulas:

**"PRIMERA.- QUE POR ESTE CONVENIO "LOS PROPIETARIOS", PONEN A DISPOSICIÓN DE "LA SECRETARÍA" Y "LOS POBLADOS", LOS INMUEBLES RELACIONADOS EN LOS PRIMEROS PUNTOS DE SUS DECLARACIONES, CUYAS SUPERFICIES, MEDIDAS Y COLINDANCIAS CONSTAN EN LAS ESCRITURAS Y PLANOS DE PROPIEDAD, Y SE TIENEN AQUÍ ÍNTEGRA Y TOTALMENTE REPRODUCIDAS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA.**

**SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA" Y "LOS POBLADOS" ACEPTAN Y RECIBEN LOS INMUEBLES SEÑALADOS PARA APLICARLOS A LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL ORIGINADO A CAUSA DE LA INSATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES AGRARIAS Y COMO CONSECUENCIA, A LA INCORPORACIÓN DE LA SUPERFICIE MATERIA DE ESTE CONVENIO AL RÉGIMEN EJIDAL DE NÚCLEOS AGRARIOS, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN AGRARIA QUE CORRESPONDA.**

**TERCERA.- "LOS PROPIETARIOS" OTORGAN A "LA SECRETARÍA" LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO PARA QUE POR SU CONDUCTO SEAN TRASLADADOS A FAVOR DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS MEDIANTE LAS ACTAS DE POSESIÓN Y DESLINDE PROCEDENTES, SIN RESERVA, NI LIMITACIÓN ALGUNA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD PARA TRANSMITIR EL DOMINIO DE LOS BIENES SEÑALADOS PARA EL FIN AGRARIO QUE SE MENCIONA EN LAS DECLARACIONES DE "LA SECRETARÍA".**

**CUARTA.- "LA SECRETARÍA" ENTREGA A NOMBRE DE "LOS POBLADOS" Y EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CELEBRADO, A "LOS PROPIETARIOS" LA CANTIDAD DE N\$ 3'206,325.53 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO NUEVOS PESOS 53/100 M.N.) PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,022-47-74 HECTÁREAS, INCLUYENDO**



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUJETAS A LOS BIENES INMUEBLES Y NECESARIAS PARA SU EXPLOTACIÓN DE LOS PREDIOS DENOMINADOS: LOTE 6, LOTE 20, LOTE 40, LOTE 25, LOTE 12, "EL BAGRE" LOTES 29, 30, 38 Y 39, 32, 41, 1 Y 34, "EL DIVISADERO", LOTE 16, 14, LOTE 15, LOTE 10, LOTE 32 Y LOTE 24, FRACCIÓN SEGREGADA DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "BOCA DEL MEZQUITAL Y EL BAGRE" HOY CONOCIDO COMO "SANTA ANITA", MUNICIPIO Y ESTADO DE DURANGO, A EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE LA SUPERFICIE AL RÉGIMEN EJIDAL, QUIENES LA RECIBEN A SU ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: FRANCISCO AMADOR BAÑUELOS N\$ 63,420.80; VALENTÍN DIAZ AVALOS N\$ 31,360.91; TERESA CASTILLO SALAS N\$ 79,276.23; ANA MA CASTILLO SALAS N\$84,756.74; JORGE CASTILLO SALAS N\$171,652.11 REMIGIO TORRES ACUÑA N\$ 31,362.79; JUAN F. MEZA SÁNCHEZ N\$31,362.79; ÁNGEL ÁVILA CASTILLO N\$ 614,518.02; SUC. A BIENES DE ÁNGEL ÁVILA RAMÍREZ N\$ 1,640,834.55; HIPÓLITO GARCÍA CABRERA N\$ 31,358.40; SUC. A BIENES DE JESÚS DIAZ HERRERA N\$ 31,358.40; JOSÉ VÁZQUEZ MARTÍNEZ N\$ 31,358.40; GABRIEL ÁVILA CASTILLO N\$ 157,041.93 JUAN IGNACIO ÁVILA CASTILLO N\$ 206,683.46.**

**QUINTA.- POR SU PARTE "LOS PROPIETARIOS" OTORGAN A "LA SECRETARIA" Y A LAS AUTORIDADES INTERNAS DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS, POR EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRAPRESTACIÓN QUE RECIBEN, EL FINIQUITO MAS EFICAZ QUE EN DERECHO PROCEDA, MANIFESTANDO QUE NO SE RESERVAN ACCIÓN ALGUNA QUE EJERCITAR, NI DERECHO ALGUNO QUE DEDUCIR, Y QUE SEA DE INDOLE LOCAL O FEDERAL.**

**SEXTA.- QUE LAS PARTES SE SOMETEN, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, A LAS LEYES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE LES PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE SU DOMICILIO.**

**SÉPTIMA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE EL PRESENTE CONVENIO DEBE SER DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD QUE CORRESPONDA A LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE Y EN EL REGISTRO NACIONAL AGRARIO A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN AGRARIA EN EL ESTADO, PARA QUE SURTA EFECTOS FRENTE A TERCEROS.**

**OCTAVA.- CONVIENEN "LA SECRETARIA" Y "LOS POBLADOS" QUE LA ENTREGA MATERIAL DE LOS INMUEBLES MEDIANTE EL ACTA DE POSESIÓN Y SU DESLINDE, SERÁ REALIZADA Y DISTRIBUIDA POR LA DELEGACIÓN AGRARIA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL NUMERO DE CAPACITADOS, LAS ACCIONES AGRARIAS Y LA CALIDAD DE LOS PREDIOS.**

**NOVENA.- IGUALMENTE MANIFIESTAN LAS PARTES QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE DOLO, LESIÓN O VIOLENCIA Y EN GENERAL NINGUNA CAUSA QUE PROVOCARE UN VICIO DEL CONSENTIMIENTO POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO LO SUSCRIBEN A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES."**

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

Firmando en representación de la Secretaría de la Reforma Agraria su Oficial Mayor y el Director General de Asuntos Jurídicos; por los propietarios Jorge Castillo Sales, por su propio derecho y como apoderado legal de los diversos propietarios que se relacionan en la cláusula cuarta del presente convenio; por parte de los núcleos de población mencionados con antelación, sus representantes legales.

**OCTAVO.** Mediante acta de posesión precaria de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se hizo la entrega material al poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango, la superficie de 225-95-80 (doscientas veintidós hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas), por conducto de los representantes legales del poblado Rodolfo De León A., Jesús Pérez Vázquez y Cleto García Hernández, en debido cumplimiento del convenio referido en el punto anterior, en la que intervinieron por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los comisionados Juan Maldonado Cisneros y Jesús Santillán Torres, los representantes del poblado referido, así como diversos campesinos de dicho poblado, y el propietario Jorge Castillo Salas, por su propio derecho y como apoderado legal de los demás propietarios que suscribieron el convenio que se indica.

En dicha documental, consta que los comisionados llevaron a cabo el recorrido de los terrenos antes citados, entregando en forma material la superficie adquirida, quienes precisaron sus medidas y colindancias, con apoyo en las escrituras de propiedad y planos respectivos; diligencia que se entendió con un total de treinta y tres campesinos que intervinieron en la misma.

En el plano elaborado con motivo de la entrega precaria de los terrenos adquiridos, consta la descripción gráfica del polígono que generó el levantamiento topográfico de tales terrenos, que arrojó una

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

superficie analítica de 220-22-96.49 (doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve miliáreas).

**NOVENO.** Consta en los autos del expediente administrativo que campesinos del poblado que nos ocupa, solicitaron al Delegado de la Procuraduría Agraria en el estado de Durango, su intervención con el objeto de que se les regularizara la posesión precaria de la superficie de 225-25-80 (doscientas veinticinco hectáreas, veinticinco áreas, ochenta centiáreas), que fue adquirida en su favor por el Gobierno Federal, cuyo levantamiento topográfico arrojó una superficie analítica de 220-22-96.49 (doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve miliáreas), para que fuera incorporada al régimen ejidal; también solicitaron la actualización censal del padrón de poseedores de tales terrenos, a quienes se les entregó la superficie en mención, dado que en la actualidad un total de veinticinco campesinos tienen trabajando la superficie adquirida por la Secretaría de la Reforma Agraria, desde la fecha en que se les hizo la entrega precaria.

También señalan que en la asamblea celebrada el veintidós de enero de mil novecientos noventa y tres, eligieron a los integrantes del comité particular ejecutivo para que los represente en la acción agraria correspondiente, el cual quedó integrado por Rodolfo De León Avitia, Teodorico Leal Salas y Manuel Mayorga Valdez, con el carácter de presidente, secretario y vocal.

**DÉCIMO.** Por oficio sin número de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, la Delegación de la Secretaría Agraria en el estado de Durango, ordenó instaurar el expediente relativo al Coordinador del Programa de Incorporación de Tierras al Régimen Ejidal para su trámite correspondiente.

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**DÉCIMO PRIMERO.** Obra en autos certificación del encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Durango, suscrita el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, en la que hace constar que los predios adquiridos por la Secretaría de la Reforma Agraria, fueron inscritos el treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis, bajo el número 254 a fojas 130 vuelta, del tomo I de Bienes Nacionales (foja 523, legajo I).

**DÉCIMO SEGUNDO.** El Cuerpo Consultivo Agrario emitió su dictamen el once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en términos de los artículos 304 y 16, fracción 1 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en el sentido de que es procedente la acción de incorporación al régimen ejidal, de las tierras adquiridas por el Gobierno Federal en favor del poblado de que se trata.

DE ACUERDO  
DURANGO, DGO

**DÉCIMO TERCERO.** Por auto de diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho, este Tribunal Superior Agrario radicó el expediente de mérito, registrándolo en el Libro de Gobierno con el número 22/1998, relativo a la ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, y lo turnó a la ponencia correspondiente para que formulara el proyecto de sentencia y lo sometiera a la consideración del Pleno.

**DÉCIMO CUARTO.** El Tribunal Superior Agrario dictó sentencia el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero del año dos mil, de conformidad con los puntos resolutivos que se reproducen íntegramente:

**"PRIMERO.-** Es procedente la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, a favor del núcleo de población denominado "Francisco Montes de Oca", Municipio de Durango, Estado de Durango.

**SEGUNDO.-** Es de dotarse y se dota al poblado referido en el resolutivo anterior, con una superficie de 220-22-96.49

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

*(doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve milíareas) de riego, temporal y agostadero, que tomaron de los predios denominados: "Lote 6", "Lote 20", "Lote 40", "Lote 25", "Lote 12" y del predio "El Bagre", "Lotes 41, 1 y 34; de la fracción segregada del "Lote 14", "Lote 15", "Lote 10", "Lote 32", "Lote 24", todos del fraccionamiento "Boca del Mezquital y El Bagre", hoy conocido como "Santa Anita", ubicados en el Municipio y Estado de Durango; propiedad de la Federación, que resultan afectables de conformidad con el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.*

*La superficie que se concede deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.*

*TERCERO.- Se dota al poblado de referencia, con el volumen de aguas necesarias y suficientes para el riego de la superficie de esa calidad que se concede en la presente resolución, con fundamentos en los artículos 229 y 230 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con las modalidades y en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales.*

*CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a realizar la inscripción respectiva en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos conforme a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.*

*QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Durango, a la Procuraduría Agraria, a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Oficialía Mayor y a la Comisión Nacional del Agua; ejecútase y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido."*

**DÉCIMO QUINTO.** Inconforme con la sentencia anterior Carlos Ibarra Saucedo, Ramón Ibarra Saucedo, Adalberto Ibarra Salcido, Antonio Ibarra Hernández, María Dolores Ibarra Hernández, Trinidad Leal Ramos, Pánfilo de León Lobatos, Juan Castro Galindo, Salvador Cesar Castro Galindo, María Encarnación Pérez Vázquez, Isabel Mejía Valdez, Roberto Mayorga Valdez, Jesús Mayorga Valdez, María Luisa Razo Salazar, Manuel Mayorga Valdez y Mauricio Mayorga Valdez, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes:

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

Al Tribunal Superior Agrario, se le reclama la sentencia emitida en el juicio agrario número 22/1998, de fecha uno de abril de mil novecientos noventa y ocho; la falta de emplazamiento para poder comparecer en el juicio agrario señalado, para defender su derecho de posesión que ejercen en el predio "Santa Anita", que fue adquirido por el Gobierno Federal para satisfacer sus necesidades de tierras, que les fueron entregadas mediante acta de posesión precaria, de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en cumplimiento del convenio celebrado el veintinueve de agosto del mismo año, ordenándose de que en la sentencia impugnada fueron reconocidos como beneficiados un total de veinticinco personas que no forman parte de los campesinos que recibieron la posesión precaria de tales tierras, ni tampoco forman parte de los solicitantes originales, y por lo tanto se excluyó a los quejosos como beneficiados de dicha acción agraria.

Al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, con sede en el estado de Durango, se reclama la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario, que realizó el uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en la que se dio posesión a un grupo de veinticinco individuos, puesto que algunos de ellos no tomaron posesión de las tierras del predio Santa Anita, que les fueron entregadas mediante acta de posesión precaria levantada el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por los comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria, en perjuicio de los quejosos.

A la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reclaman el incumplimiento del convenio de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, ya que en base a éste se les entregó a los quejosos la posesión precaria de las tierras que adquirió dicha dependencia federal, para

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

satisfacer las necesidades de tierras en favor del poblado de que se trata.

Al Cuerpo Consultivo Agrario, le reclaman el dictamen emitido en sentido positivo, el once de febrero de mil novecientos noventa y ocho en el que estimó procedente la acción de incorporación al régimen ejidal, de las tierras adquiridas por la Secretaría de la Reforma Agraria.

A la Delegación de la Procuraduría Agraria, los actos tendentes a patrocinar a los veinticinco campesinos a quienes se les reconocieron derechos agrarios sobre el predio "Santa Anita", adquirido por el gobierno federal, excluyendo a los quejosos de la depuración censal, aun cuando tuvo conocimiento que estos recibieron la superficie del terreno proveniente del predio en mención.

Al Gobierno del estado de Durango y Delegación del Registro Agrario Nacional de la misma entidad federativa, les reclamaron al primero, la publicación de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario, en el Periódico Oficial del gobierno del estado; al segundo, la inscripción correspondiente en esa oficina registral.

Del juicio de amparo conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Durango, bajo el número 345/2000, que resolvió por ejecutoria de veintiocho de agosto del año dos mil, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en los términos y para los efectos que se precisan en el Considerando Séptimo de la ejecutoria de mérito, que se reproduce de manera literal en la parte que interesa:

**"...En el caso concreto, los quejosos reclaman la omisión de haber sido emplazados al juicio agrario del cual emanan los actos reclamados, por virtud de haber sido excluidos de la depuración censal realizada por el delegado de la Procuraduría Agraria, motivo de queja que resulta fundado, por lo siguiente.**

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

*Como quedó asentado en el considerando que antecede, con fecha veintiséis de Noviembre de mil novecientos noventa y tres, se levantó el acta de posesión precaria de la superficie concedida a los integrantes del poblado Francisco Montes de Oca, quienes solicitaron que los terrenos otorgados en vía compensatoria fueran incorporados al régimen ejidal, según se advierte de la cláusula segunda de dicho documento (foja 932).*

*A petición de algunos campesinos, del mencionado poblado, el delegado de la Procuraduría Agraria intervino para regularizar la posesión precaria y actualizar el padrón de posesionarios, diligencia que se levantó el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho, y es del tenor siguiente:*

*"Acta de reunión de posesionarios. Acta de la reunión del grupo de campesinos que detentan el predio (s) Santa Anita del poblado Francisco Montes de Oca municipio de Durango, del Estado de Durango, citada por la Procuraduría Agraria del Estado de Durango y realizada el 23 de Enero de 1998, bajo el siguiente: Orden del día. I. Lista de posesionarios. II. Objetivos de la reunión. III. Aprobación del padrón de posesionarios. IV. Nombramiento de representantes del grupo de campesinos para trámites de regularización. V. Ratificación de la solicitud a la Procuraduría Agraria, para el efecto, que se les brinde asesoría, gestión y representación legal ante las autoridades correspondientes. Acto seguido, se procede al desahogo del orden del día en los siguientes términos: I. El visitador agrario y los representantes de los posesionarios, integraron una lista de campesinos que arroja un total de asistencia, estando presentes en este acto un total de 25 posesionarios. II. El visitador agrario señaló que el objetivo fundamental de esta reunión es el de actualizar el padrón de posesionarios de los predios que detentan, con la finalidad de construir el listado definitivo de campesinos, del predio para su regularización. Por lo que en este acto se sometió a consideración de los posesionarios la integración del padrón preliminar, que contiene un total de 25 campesinos, el cual fue aprobado por 25, de un total de 25 posesionarios. IV. Acto seguido, se procedió a designar a los representantes de los posesionarios, recayendo dichos caragos en los CC. Hortensia Murillo Ortiz, Luis García Contreras y Martín del Villar Quiroz, quienes aceptaron sin presión de ninguna naturaleza y comprometiéndose a cumplir el mismo, que conlleve la regularización de su predios. V. A continuación los posesionarios solicitaron que la Procuraduría Agraria continúe su asesoría, gestión y sobre todo los represente legalmente, ante las autoridades habiendo otro asunto que tratar se dio por clausurada la reunión a las 6:00 horas del 23 de enero de 1998, firmando para constancia el visitador agrario, los representantes de los posesionarios y los asistentes que desearon hacerlo."*

*Una vez que el procedimiento de ampliación se puso en estado de resolución y, conforme al artículo tercero transitorio de la Ley Agraria, fue enviado al Tribunal Superior Agrario, quien en uso de las facultades concedidas en el artículo cuarto transitorio de la referida ley, el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, pronunció la resolución mediante la cual declaró procedente la tercera ampliación de tierras al régimen ejidal a favor del núcleo de población Francisco Montes de Oca, del municipio de Durango, y dotó a veinticinco capacitados, en base a la depuración censal*



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

(donde no se incluyó a los quejosos), de una superficie de doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, nueve miláreas, así como del volumen de aguas necesarias para el riego de la superficie de calidad que se concede. Ordenó publicar dicha resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, y los puntos resolutive en el Boletín Judicial Agrario, que se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y en el Registro Agrario Nacional. También ordenó notificar a los interesados, que se comunicara por oficio al Gobernador de este Estado de Durango, a la Procuraduría Agraria, Secretaría de la Reforma Agraria y a la Comisión Nacional del Agua, que se ejecutara la resolución y en su oportunidad se archivara el asunto como concluido.

Mediante diligencia practicada por el personal del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en esta entidad, el uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se ejecutó la resolución pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, dándose posesión legal y definitiva de los terrenos concedidos mediante resolución a los beneficiados con la misma.

Pues bien, del análisis del procedimiento seguido en la depuración censal se advierte que no fue hecho conforme a las reglas que establece la legislación agraria que regían en el momento en que tuvieron lugar los hechos que se analizan, pues no existe constancia de que se haya publicado la convocatoria con los requisitos que establece el artículo 32, de la citada ley, ni obra en autos la notificación que se haya practicado a los interesados, en este caso a los quejosos, quienes tenían a su favor el haber sido beneficiados con la resolución presidencial del dos de febrero de mil novecientos treinta y ocho, y a quienes también les fue entregada la posesión precaria de la superficie de terreno que adquirió la Secretaría de la Reforma Agraria para cumplimentar la resolución presidencial de mérito; dicha depuración no tomó como base el censo original o básico, pues únicamente se asentó que e integró una lista de campesinos, y arrojó un total de veinticinco, el cual constituyó el padrón preliminar, mismo que fue aprobado por los asistentes, y el visitador agrario levantó el acta respectiva; por otro lado, tal diligencia no se levantó en los términos que prevé el artículo 287, de la Ley Federal de Reforma Agraria, pues no estuvieron presentes los representantes de la Comisión Agraria Mixta y de los campesinos peticionarios, nombrado este último por el Comité Particular Ejecutivo.

De ello se sigue que la depuración censal realizada en esos términos, conculca en perjuicio de los quejosos la garantía de audiencia, pues al no haber sido citados en los términos de ley a esa junta, no estuvieron en aptitud de hacer valer sus derechos, conforme lo establecía el segundo párrafo del artículo 288 de la misma codificación, y a virtud de ello, fueron excluidos de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho; de manera que este órgano de control constitucional estima ilegal tal resolución pues contiene una causa procedimental viciada, que deja en esta de indefensión a los quejosos, al impedirles hacer valer sus derechos, de ahí que procede concederles el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que esa autoridad responsable, deje sin efecto la precitada resolución, y envíe el procedimiento a la

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

*autoridad competente conforme a la legislación agraria anterior a la reforma, y actualice el padrón de beneficiarios conforme a las disposiciones aplicables al caso, a fin de que los impetrantes sean oídos y vencidos en dicho procedimiento.*

*No impide arribar a la anterior conclusión, el que el delegado estatal de la Procuraduría Agraria no se tuvo como autoridad responsable, pues dentro de sus facultades no están las de decisión o empleo de la fuerza pública, sino que es un auxiliar de las funciones que le fueron encomendadas a la Procuraduría Agraria, quién tampoco es autoridad responsable en el juicio de garantías y, que fue el visitador agrario quién levantó el acta de posesionarios base de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, ello en virtud de que según se advierte de la diligencia respectiva, los que asistieron a la junta de posesionarios, son los que aprobaron el padrón, y este último únicamente realizó la función que le encomendó la Procuraduría Agraria; no obstante ello, el último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley + último párrafo del artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, impone como obligación al Tribunal Superior Agrario, de que en los expedientes como el que se analiza, de haberse observado la garantía de audiencia, se subsanará esa deficiencia ante el propio tribunal.*

AGRICULTORES  
EJIDATARIOS  
ACUERDO  
NGO, DGO

*Es aplicable a lo anterior el criterio que aparece en la página diecinueve, Tomo 56 Sexta Parte, Séptima Época, Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que dice:*

**"AGRARIO. RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE EJIDOS VICIADA, PORQUE LA DEPURACIÓN CENSAL NO PARTIO DEL CENSO BÁSICO. (Se reproduce)**

*Igualmente cobra aplicación la tesis visible en la página cincuenta y tres, Tomo 2, Tercera Parte, Séptima Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación, que dice:*

**"AGRARIO. DEPURACIÓN CENSAL. PUEDE SER ANULADA LA QUE ADOLECE DE DEFECTOS LEGALES Y ORDENARSE OTRA. (Se reproduce)**

*En las relatadas condiciones lo procedente es conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Superior Agrario deje sin efecto la resolución emitida el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, y remita las actuaciones a la delegación de la Procuraduría Agraria para que se haga la depuración censal observando las formalidades que se debe acatar en una reunión de asamblea general, conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria que resulta ser la ley aplicable al caso, y se conceda la garantía de audiencia a los quejosos para que hagan valer en ella las observaciones que estimen pertinentes, pues solo de esta manera se restituiría a los quejosos en el pleno goce de la garantía individual transgredida, de conformidad con el artículo 80, de la Ley de Amparo.*

*Dicha concesión se hace extensiva por cuanto a las autoridades responsables Gobernador Constitucional en el Estado, delegado del Registro Agrario Nacional y Magistrado del Tribunal Unitario del*

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

***Séptimo Distrito, pues al dejar sin efecto la resolución pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, las consecuencias emanadas de dicha resolución siguen la misma suerte que aquélla.***

**DÉCIMO SEXTO.** El Tribunal Superior Agrario funcionando en Pleno, en inicio de cumplimiento de la ejecutoria referida, por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil uno, en su punto primero, dejó sin efectos la sentencia emitida el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio agrario 22/1998, relativo a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, de la misma entidad federativa, y sus consecuencias, como lo son la ejecución de la ejecución de la sentencia impugnada, su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Durango, así como su inscripción en la Delegación del Registro Agrario Nacional.

En el punto segundo del acuerdo de mérito, se ordenó remitir los autos del expediente administrativo, sin número, a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de su Unidad Técnica Operativa, copia certificada del presente acuerdo, y de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto número 345/2000, para que en el ámbito de su competencia diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Hecho lo anterior, remitiera a este Órgano Jurisdiccional debidamente integrado y en estado de resolución el expediente administrativo agrario, relativo a la acción agraria de que se trata, a fin de que se dicte la sentencia definitiva que en derecho proceda.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** En contra del acuerdo anterior, Pánfilo de León Lobatos, por su propio derecho y como representante común de los quejosos en el juicio de amparo indirecto 345/2000, por escrito de veintiocho de noviembre de dos mil tres, interpuso recurso de queja, por estimar defectuoso el cumplimiento que el Tribunal Superior Agrario estaba dando a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo señalado; por resolución de diecinueve de noviembre de dos mil tres

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

se declaró fundado el recurso de queja, por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo promovido, únicamente respecto de este Órgano Jurisdiccional.

Por consiguiente, se requirió al Tribunal Superior Agrario para que diera debido cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintiocho de agosto de dos mil, en la forma y términos precisados en la parte final del considerando tercero del recurso de queja, que se reproduce en la parte que interesa:

***"... Es fundado el motivo de queja expresado por el impetrante, únicamente por lo que respecta al Tribunal Superior Agrario, con residencia en México, Distrito Federal."***

(...)  
De los preceptos antes transcritos permiten concluir, que de acuerdo al contenido del artículo tercero transitorio que reformó el artículo 27 Constitucional, estableció claramente que la Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario y la Comisión Agraria Mixta, con la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria, tendrían a su cargo el integrar los expedientes que se encontraran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, creación de nuevos centro de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, y turnarlos a los tribunales agrarios para que resolvieran en definitiva; una vez que estos Tribunales reciban los expedientes para dictar la resolución legales antes citadas, si advierten que no se observó la garantía de audiencia de alguna de las partes que intervinieron en el juicio, debe ordenar la reposición del procedimiento para subsanar esa omisión.

Conviene precisar que en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria, se suprimieron las unidades administrativas del Cuerpo Consultivo Agrario y Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario, que tenían a su cargo el seguimiento de los procedimientos agrarios antes citados, creándose la unidad Técnica Operativa, quién asumiría las funciones que tenían las dependencias que fueron suprimidas.

Ahora bien, como ya se precisó, el amparo se concedió para que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario en México, Distrito Federal, dejará sin efecto la resolución pronunciada por el mismo el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, y remitiera el procedimiento a la autoridad competente conforme a la legislación agraria anterior a la reforma, y se actualizara el padrón de beneficiarios de acuerdo a los impetrantes sean oídos y vencidos en dicho procedimiento.

De las constancias que remitió la autoridad responsable antes citada, para demostrar el cumplimiento de dicha ejecutoria, se

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

obtiene que dejó insubsistente la sentencia pronunciada el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el expediente del juicio agrario 22/1998, relativo a la tercera ampliación del ejido por incorporación de tierras del régimen ejidal al poblado Francisco Montes de Oca, municipio de Durango y remitió dicho expediente a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Unidad Técnica Operativa dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que en el ámbito de su competencia diera cumplimiento a la ejecutora de mérito, y hecho esto, enviara nuevamente las actuaciones a ese órgano jurisdiccional, debidamente integradas y estado de resolución, a fin de dictar la sentencia correspondiente, lo anterior se desprende del oficio número 10649 del veinticuatro de Septiembre de dos mil uno, y del acuerdo emitido en esa misma fecha.

En el informe que rindió la referida autoridad, relativo a la queja que se analiza, sostiene que no ha incurrido en incumplimiento del fallo protector emitido en este juicio, toda vez que el acuerdo del veintiuno de Septiembre de dos mil uno, se dictó en vías de cumplimiento, es decir, solamente se han realizado actos tendentes a la depuración censal observando las formalidades para la celebración de la asamblea general de ejidatarios, conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria.

No obstante estas manifestaciones, por acuerdo del primero de julio de dos mil dos, se tuvo cumplimentada dicha sentencia, de ahí que sea procedente el recurso de queja por defecto en el cumplimiento.

Se afirma lo anterior, porque el Tribunal Superior Agrario con residencia en México, Distrito Federal, dejó insubsistente la resolución pronunciada el primero de abril de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, la concesión del amparo comprende la realización del censo agrario, a fin de que los quejosos sean citados conforme las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Reforma Agraria vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, es decir, que se les conceda la garantía de audiencia que les fue infringida, para que estén en posibilidad de hacer valer las defensas que estimen pertinente, hecho esto, se integre debidamente el expediente y se ponga en estado de resolución para que ese órgano jurisdiccional agrario esté en condiciones de dictar nuevamente la resolución que corresponda, lo que en la especie no ha acontecido, dado que esa autoridad solamente dejó insubsistente la precitada resolución, y resulta insuficiente el haber remitido las constancias del juicio agrario a la Unidad Técnica Operativa (autoridad competente para realizar los trámites de la asamblea general) para que este realice la depuración censal.

Aunado a lo anterior, el propio Tribunal Agrario reconoce que el acuerdo del veintiuno de Septiembre de dos mil uno, se dictó en vías de cumplimiento, e incluso mediante proveído del doce de Septiembre de dos mil dos, emitió un acuerdo complementario en el que ordenó remitir copia certificada del primer proveído a la Delegación de la Procuraduría Agraria en este Estado de Durango, a efecto de que en coordinación con la representación estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria en la misma entidad federativa, se de cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y que una vez que eso suceda, esa delegación les remita el expediente

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**debidamente integrado, procederá a dictar la resolución correspondiente.**

**No es óbice a tal conclusión, el que en la concesión del amparo no figure como autoridad responsable la Secretaría de la Reforma Agraria, ni la Unidad Técnica Operativa, dado que es el propio Tribunal Agrario quien debe vigilar la debida integración del expediente agrario a fin de que le sea turnado para dictar la resolución correspondiente, puesto que el mismo artículo tercero transitorio de la Ley Agraria y del Reglamento Interior de esa legislación, prevén la posibilidad de reponer el procedimiento cuando exista violación a la garantía de audiencia que tutela el artículo 16 Constitucional.**

**Apoya lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J 72/98, página 429, del Tomo VIII, Septiembre de 1998, de la Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:**

**TRIBUNALES AGRARIOS. SON AUTORIDADES SUSTITUTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO RELACIONADAS CON ACUERDOS DOTATORIOS DE TIERRAS. (Se reproduce)**

**En esas condiciones, es evidente que con ese proceder no se restituyó a los quejosos en el pleno goce de la garantía legal violada, en términos de lo previsto por el artículo 80 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, el presente recurso de queja debe declararse fundado, a fin de que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario con residencia en México, Distrito Federal, realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la asamblea general que tendrá por objeto la depuración censal, observando las formalidades legales y se le otorgue a los quejosos la garantía de audiencia, hecho esto se integre debidamente el expediente y en estado de resolución le sea remitido para que proceda a dictar la resolución que en derecho proceda."**

**DÉCIMO OCTAVO.** El Tribunal Superior Agrario, en estricto cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de queja que deriva de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto número 345/2000, por acuerdo tomado en sesión del Pleno de fecha veintinueve de enero de dos mil cuatro, determinó lo siguiente:

**"PRIMERO.- Remítase a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Unidad Técnica Operativa dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, copia certificada del presente acuerdo, de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 345/2000, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente en el que quede legalmente notificado del presente acuerdo y en el ámbito de su competencia, por conducto de la autoridad que al efecto se designe, expida la convocatoria para celebrar los trabajos de depuración censal a que**

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

*se refieren los artículos 287 y 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria.*

**SEGUNDO.-** Solicítese a la dependencia referida en el punto que antecede que una vez complementado lo ordenado en el resolutivo anterior, remita a este órgano jurisdiccional debidamente integrado y en estado de resolución el expediente administrativo agrario sin número, relativo a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal al poblado Francisco Montes de Oca, municipio de Durango, estado de Durango, a fin de que se dicte la sentencia definitiva que en derecho proceda.

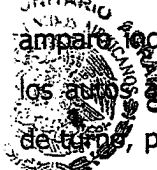
**Tercero.-** Remítanse a la Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de Durango, copias certificadas del presente acuerdo, para los efectos legales procedentes.

**CUARTO.-** Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, a fin de acreditar el cumplimiento que el Tribunal Superior Agrario está dando a la ejecutoria de amparo de referencia."


**DÉCIMO NOVENO.** Consta en autos que mediante diversos oficios recordatorios emitidos en diversas fechas (fojas 57, 78, 224, 232, 254, 272, 278, 306, 325, 333, 371, 378, 498, 521, 528, 550, 552, 560 de los autos del juicio agrario), este Órgano Jurisdiccional requirió a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que se desahogara la depuración censal de los solicitantes de tierras, conforme a lo dispuesto por los artículos 287 y 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en estricto cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo número 345/2000, para lo cual debía realizar todas las gestiones para llevar a cabo la asamblea general de ejidatarios, en la que se diera intervención a los quejosos en el juicio de garantías, así como a los veinticinco campesinos a los que les fueron reconocidos sus derechos agrarios en la sentencia emitida el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio agrario 22/1998, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; satisfecho lo anterior, una vez integrado debidamente el expediente referido, ordenó su remisión a este Tribunal Superior Agrario, para estar en posibilidad de resolver lo que en derecho correspondiera.

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**VIGÉSIMO.** Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio número REF:II-210-DGPR-DGATO 5245, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, suscrito por el Director General Adjunto de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que anexa siete legajos de las constancias relativas al expediente original, que corresponde a la acción de tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado de que se trata, y dos legajos en los que constan las actuaciones relativas a la reestructuración del comité particular ejecutivo de los solicitantes de la acción agraria intentada, y a la depuración censal de los campesinos solicitantes de tierra, que se realizó en estricto cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto número 345/2000, hecho lo cual, se ordenó remitir los autos a la Magistratura Ponente, a la que tocó conocer por razón de turno, para instruir el procedimiento, y en su oportunidad, elaborar el proyecto de sentencia definitiva correspondiente.

  
DURANGO, DGO

**VIGÉSIMO PRIMERO.** Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince, esta Magistratura de Instrucción tuvo recibidos los autos del juicio agrario número 22/1998, así como el expediente administrativo que corresponde a la acción de tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado denominado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango, compuesto por cinco legajos, y dos legajos que corresponden los trabajos relativos a la reestructuración del comité particular ejecutivo del poblado señalado, y a las diligencias de depuración censal de los campesinos del propio poblado, que fueron elaboradas por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de la Reforma Agraria, en coordinación con personal de la Procuraduría Agraria, acordándose en relación con los trabajos de depuración censal, que serían analizados para poder determinar si se dio debido cumplimiento a los lineamientos





Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

establecidos en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 345/2000, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil.

**VIGÉSIMO SEGUNDO.** En atención a los trabajos que corresponden a la reestructuración del comité particular ejecutivo de los solicitantes de tierras, del análisis del acta relativa, se desprende que la asamblea general se realizó el trece de junio de dos mil quince, en segunda convocatoria, constando en autos que previo a su celebración, se giraron cédulas de notificación común de fecha cuatro de junio de dos mil quince, dirigidas a las integrantes del comisariado ejidal del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango, al consejo de vigilancia, comité particular ejecutivo que representa a los solicitantes de tierras del mismo poblado, a los dieciséis campesinos quejosos en el juicio de amparo número 345/2000, así como a los veinticinco campesinos que fueron beneficiados por la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, que a la postre quedó insubsistente como consecuencia de la ejecutoria dictada en el juicio de garantías que se indica, que fueron suscritas por los comisionados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, licenciados Roberto Carlos Gurrola Nevárez y Raúl Octavio Caldera Rodríguez, así como el ingeniero Gonzalo Rodríguez Ibarra, comisionado por la Procuraduría Agraria.

En el acta relativa a la reestructuración del comité particular ejecutivo de la segunda y/o tercera ampliación de ejido (sic), una vez consultada la asamblea, quedó integrado por Mauricio Mayorga Valdez, Carlos Ibarra Saucedo y José Humberto Reyes Ortiz, para ocupar los cargos de Presidente, Secretario y Vocal, quienes resultaron electos por unanimidad de votos de quienes asistieron a la asamblea, que corresponde a un 14.44% del total del padrón de ejidatarios con derechos vigentes dentro del ejido, así como ocho solicitantes de la acción agraria intentada, quienes aparecen como quejosos en el juicio

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

de amparo 345/2000 y como beneficiados en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal Superior Agrario, el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho.

**VIGÉSIMO TERCERO.** En relación a la diligencia de depuración censal, constan en autos los trabajos relativos, así como el informe rendido por los comisionados por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, licenciados Roberto Carlos Gurrola Nevárez y Raúl Octavio Caldera Rodríguez, con fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, en el que substancialmente establecen que una vez que terminaron los trabajos censales, en coordinación con personal de la Procuraduría Agraria, dieron como resultado un total de cuarenta y tres campesinos que acreditaron su capacidad agraria, en el expediente relativo a la ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, para el efecto de que se les regularice la posesión sobre las tierras adquiridas por el Gobierno Federal en favor del poblado denominado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango.

#### CONSIDERANDO:

**PRIMERO.** Este Tribunal Superior Agrario es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; Tercero Transitorio de la Ley Agraria; 1º, 9º, fracción VIII y Cuarto Transitorio fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

**SEGUNDO.** La presente sentencia se dicta en estricto cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo indirecto número 345/2000, por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

Durango, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Carlos Ibarra Saucedo y otros (quince campesinos), para el efecto de que este Tribunal Superior Agrario, dejara insubsistente la sentencia emitida en el juicio agrario número 22/1998, de fecha uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, relativo a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango para que en asamblea general de los solicitantes de tierras, se lleve a cabo la depuración censal de los campesinos que recibieron las tierras de manera precaria, así como los campesinos a los que les fueron reconocidos derechos agrarios en el juicio agrario referido, observando las formalidades del procedimiento, concediéndoles la garantía de audiencia, para que hagan valer en ella las observaciones que estimen pertinentes; la concesión del amparo se hizo extensiva a las consecuencias emanadas de la sentencia reclamada, y para las demás autoridades responsables, Gobernador del estado de Durango, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, Delegado del Registro Agrario Nacional, como son los actos de ejecución, publicación e inscripción del fallo impugnado.

**TERCERO.** Por lo que corresponde a la capacidad individual y colectiva de los solicitantes de la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango, cabe efectuar las consideraciones siguientes:

1.- En los autos del expediente relativo a la acción agraria de que se trata, se conoce que este poblado mediante Resolución Presidencial de dos de febrero de mil novecientos treinta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, le fue concedida en la vía de segunda ampliación de ejido, una superficie de 602-00-00 (seiscientas dos

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

hectáreas), para beneficiar a un total de cuarenta y tres campesinos con capacidad agraria, sin que se expresen sus nombres en el fallo presidencial señalado; sin embargo, el nombre de ellos consta en la documental que obra en el expediente que nos ocupa en la foja 44, del legajo I, siendo los siguientes:

- 1.- CONRADO PEREZ REYES
- 2.- PANFILO DE LEÓN LOBATOS
- 3.- JUAN DE LEÓN AVITIA
- 4.- FLAVIO GONZALEZ SALAS
- 5.- FILEMON MERCADO OLIVAS
- 6.- ALFONSO ARROYO BARBOZA
- 7.- ADOLFO CASTRO GALINDO
- 8.- DOLORES IBARRA VDA. DE LEÓN
- 9.- NATIVIDAD DEL VILLAR VDA. DE REYES
- 10.- MARÍA ENCARNACIÓN PÉREZ
- 11.- RUBEN LEAL CASTAÑEDA
- 12.- BALTASAR SILVA ESPINOZA
- 13.- TEODORO DE LEON ANDRADE
- 14.- JUAN RAZO ESCOBAR
- 15.- RICARDO CASTRO GALINDO
- 16.- HUMBERTO REYES ORTIZ
- 17.- ANTONIO IBARRA HERNANDEZ
- 18.- JESÚS SOLÍS GUTIÉRREZ
- 19.- JOSÉ CAMERINO LEAL SALAS
- 20.- LETO GARCIA HERNÁNDEZ
- 21.- MANUEL ANDRADE MONTES
- 22.- RODOLFO DE LEÓN AVITIA
- 23.- MAURICIO MAYORGA VALDEZ
- 24.- MANUEL MAYORGA VALDEZ
- 25.- JESÚS PÉREZ VÁZQUEZ
- 26.- ADALBERTO IBARRA SALCIDO
- 27.- ROBERTO MAYORGA VALDEZ
- 28.- MARTÍN DEL VILLAR QUIROZ
- 29.- RODOLFO DE LEÓN CASTRO
- 30.- TEODÓRICO LEAL SALAS
- 31.- RAMÓN IBARRA SAUCEDO
- 32.- JESÚS MAYORGA VALDEZ
- 33.- HUMBERTO IBARRA HERNÁNDEZ
- 34.- MATÍAS DE LEÓN CASTRO
- 35.- ISMAEL ANDRADE BUENO
- 36.- LUIS GARCÍA CONTRERAS
- 37.- HUGO DEL VILLAR QUIROZ
- 38.- FLORENTINO SILVA TORRES
- 39.- RODOLFO LUJÁN VARGAS
- 40.- JUAL LÓPEZ LIMONES
- 41.- VICENTE LÓPEZ LIMONES
- 42.- MANUEL VALLES QUIROZ
- 43.- MANUEL MARQUEZ DIAZ."

2.- Por otra parte, en los autos del expediente administrativo que generó el presente juicio agrario, se desprende que en la

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

substanciación del procedimiento de incorporación de tierras al régimen ejidal, se solicitó a la Procuraduría Agraria, para que en coordinación con personal de la Secretaría de la Reforma Agraria, llevara a cabo una depuración censal en relación con los campesinos vinculados con la presente acción agraria.

En autos consta que el comisionado por la Procuraduría Agraria ingeniero Francisco Reyes Solano, en su calidad de Visitador Agrario, elaboró el acta relativa el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho, en el que informa que levantó el padrón de los posesionarios que detentaban los terrenos adquiridos por la Secretaría de la Reforma Agraria, en favor del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango, desde el momento en que se llevó a cabo la entrega precaria de tales terrenos, conforme al acta de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, resultando en la citada diligencia un total de 25 (veinticinco) posesionarios (legajo II, foja 13), que debían ser considerados para resolver la acción agraria de que se trata.

3.- Con apoyo en tales diligencias y trabajos, el Cuerpo Consultivo Agrario, emitió su dictamen el once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en sentido de que es procedente la acción de ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, instaurado a favor del poblado que nos ocupa, teniendo acreditada la capacidad agraria de los 25 (veinticinco) campesinos, cuyos nombres se relacionan en el considerando Segundo del dictamen (legajo IV, hoja 4 del dictamen), con fundamento en los artículos 197 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, expresando sus nombres en el considerando II de su dictamen.

4.- De conformidad con tales antecedentes, este Tribunal Superior Agrario dictó sentencia el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que declaró procedente la acción agraria

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

instaurada de oficio, relativa a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, al quedar demostrado que no fue posible ejecutar en su totalidad la Resolución Presidencial de dos de febrero de mil novecientos treinta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, relativa a la segunda ampliación de ejido del poblado de que se trata, que le concedió una superficie de 602-00-00 (seiscientos dos hectáreas), para beneficiar a cuarenta y tres capacitados, que se ejecutó parcialmente el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, con la entrega de 518-38-83 (quinientos dieciocho hectáreas, treinta y ocho áreas, ochenta y tres centiáreas), faltando por entregarse una superficie de 83-61-17 (ochenta y tres hectáreas, sesenta y una áreas, diecisiete centiáreas).

Por consiguiente, se declaró procedente conceder al poblado solicitante, una superficie total de 220-22-96.49 (doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve milíáreas) de riego, temporal y agostadero, que se tomaron de diversas fracciones de terreno, provenientes de los predios denominados "Boca del Mezquital" y "El Bagre", también conocidos como "Santa Anita", ubicados en el municipio y estado de Durango, que adquirió la Secretaría de la Reforma Agraria a favor del poblado "Francisco Montes de Oca", para satisfacer las necesidades de tierras del poblado petionario, para beneficiar a 25 (veinticinco) campesinos capacitados que arrojó la depuración censal, cuyos nombres se relacionan en el considerando segundo de la sentencia reclamada, siendo los siguientes:

- 1.- Hortensia Murillo Ortiz
- 2.- Martín del Villar Quiroz
- 3.- Rodolfo De León Avitia
- 4.- Manuela Castañeda Rodríguez
- 5.- Juan De León Avitia.
- 6.- Baltazar Espinoza
- 7.- Rupén Leal Castañeda
- 8.- Jesús Pérez Vázquez
- 9.- Cleto García Contreras
- 10.- Cleto García Hernández.
- 11.- Juan Ángel Razo Ávila

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

- 12.- **Luis García Contreras**
- 13.- **Salvador De León Castro**
- 14.- **Matías León Castro**
- 15.- **Reynaldo Del Villar Mojica**
- 16.- **Florentino Silva Torres.**
- 17.- **Teodoro De León Andrade**
- 18.- **Enrique De León Rosales**
- 19.- **Crescencio López Rivera.**
- 20.- **Conrado Pérez Reyes**
- 21.- **Humberto Reyes Ortiz**
- 22.- **San Juana Murillo Rodríguez**
- 23.- **María Teresa Ibarra Maldonado**
- 24.- **Natividad Del Villar Barretero**
- 25.- **Vicente López Limones.**

5.- La anterior sentencia se impugnó en la vía de amparo indirecto por Carlos Ibarra Saucedo, Ramón Ibarra Saucedo, Adalberto Ibarra Salcido, Antonio Ibarra Hernández, María Dolores Ibarra Hernández, Trinidad Leal Ramos, Pánfilo De León Lobatos, Juan Castro Galindo, Salvador Cesar Castro Galindo, María Encarnación Pérez Vázquez, Isabel Mejía Valdez, Roberto Mayorga Valdez, Jesús Mayorga Valdez, María Luisa Razo Salazar, Manuel Mayorga Valdez y Mauricio Mayorga Valdez, quienes demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables al Tribunal Superior Agrario, a la Secretaría de la Reforma Agraria, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, al Gobierno del estado de Durango a la Delegación del Registro Agrario Nacional, y como actos reclamados, señalaron substancialmente los siguientes:

Al Tribunal Superior Agrario, la sentencia emitida el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho; la falta de emplazamiento para poder comparecer en el juicio agrario señalado, para defender su derecho de posesión que ejercen en el predio "Santa Anita", que fue adquirido por el Gobierno Federal para satisfacer sus necesidades de tierras, que les fue entregado mediante acta de posesión precaria de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en cumplimiento del convenio de fecha veintinueve de agosto del mismo año, puesto que en esta sentencia fueron reconocidos como beneficiados un total de veinticinco personas que no forman parte de

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

los campesinos que recibieron la posesión precaria de tales tierras, ni tampoco forman parte de los solicitantes originales, y por consiguiente se excluyó a los quejosos como beneficiados de dicha acción agraria.

Al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, con sede en el estado de Durango, se reclama la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario, que se llevó a cabo el uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en la que se dio posesión a un grupo de veinticinco campesinos que no formaron parte en la diligencia de entrega de la posesión precaria de las tierras del predio Santa Anita, de conformidad con el acta de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en perjuicio de los quejosos.

A la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le reclaman el incumplimiento del convenio de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, ya que con base en el mismo se les hizo entrega de la posesión precaria de las tierras que adquirió dicha dependencia federal en favor del poblado de que se trata.

Al Cuerpo Consultivo Agrario, reclaman el dictamen emitido en sentido positivo, el once de febrero de mil novecientos noventa y ocho en el que estimó procedente la incorporación al régimen ejidal de las tierras adquiridas por la Secretaría de la Reforma Agraria, sin considerar a los quejosos, quienes recibieron la entrega precaria de las tierras adquiridas por el Gobierno Federal.

A la Delegación de la Procuraduría Agraria, los actos tendentes a patrocinar a los veinticinco campesinos a quienes se les reconoció derechos agrarios en la sentencia reclamada, sobre el predio adquirido por el Gobierno Federal, excluyendo a los quejosos de la depuración censal, aun cuando tuvo conocimiento que éstos recibieron la posesión precaria del predio referido.



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

Al Gobierno del estado de Durango y Delegación del Registro Agrario Nacional de la misma entidad federativa, se les reclamó, al primero, la publicación de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario, en el Periódico Oficial del gobierno del estado; al segundo, la inscripción correspondiente en esa oficina registral.

Del juicio de amparo conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Durango, con el número 345/2000, que resolvió por ejecutoria de veintiocho de agosto del año dos mil, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para el efecto de que la autoridad responsable, dejara sin efectos la sentencia combatida y remitiera las actuaciones a la Delegación de la Junta Procuraduría Agraria para que realizara la depuración censal observando las formalidades del procedimiento, a través de una asamblea general, conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria, por ser la legislación aplicable, concediendo la garantía de audiencia a los quejosos para que hagan valer en ella las observaciones que estimen pertinentes.

6.- En inicio de cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo que se comenta, el Tribunal Superior Agrario en sesión del Pleno de veintuno de septiembre de dos mil uno, dejó sin efectos la sentencia emitida el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio agrario 22/1998, relativo a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, del poblado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, de la misma entidad federativa, así como consecuencias emanadas de esta sentencia, como son actos tendentes a la ejecución de la sentencia impugnada, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, así como su inscripción en la Delegación del Registro Agrario Nacional.

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

En el acuerdo de mérito, en su punto segundo, se ordenó remitir los autos del expediente administrativo, sin número, a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de su Unidad Técnica Operativa, con copia certificada del presente acuerdo, y de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto número 345/2000, para que en el ámbito de su competencia diera cabal cumplimiento a los lineamientos que se indican, relativos a la depuración censal de los solicitantes de tierras; hecho lo anterior, remitiera a este Órgano Jurisdiccional debidamente integrado y en estado de resolución el expediente administrativo agrario, relativo a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal.

7.- Inconforme con el acuerdo anterior, Pánfilo de León Lobatos, por su propio derecho y como representante común de los diversos quejosos en el juicio de amparo indirecto número 345/2000, por escrito de veintiocho de noviembre de dos mil tres, interpuso recurso de queja por estimar defectuoso el cumplimiento que el Tribunal Superior Agrario estaba dando a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo señalado.

Mediante resolución dictada por el Juez Tercero de Distrito en el estado de Durango, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil tres, se declaró procedente el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sólo por lo que toca a este Órgano Jurisdiccional; por consiguiente, se le requirió para que diera cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintiocho de agosto de dos mil, en la forma y términos precisados en la parte final del considerando tercero de esta resolución, que se reproduce en la parte que interesa:

*"Se afirma lo anterior, porque el Tribunal Superior Agrario con residencia en México, Distrito Federal, dejó insubsistente la resolución pronunciada el primero de abril de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, la concesión del amparo comprende la realización del censo agrario, a fin de que los quejosos sean citados conforme las disposiciones contenidas en la Ley Federal de*

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

*Reforma Agraria vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, es decir, que se les conceda la garantía de audiencia que les fue infringida, para que estén en posibilidad de hacer valer las defensas que estimen pertinente; hecho esto, se integre debidamente el expediente y se ponga en estado de resolución para que ese órgano jurisdiccional agrario esté en condiciones de dictar nuevamente la resolución que corresponda, lo que en la especie no ha acontecido, dado que esa autoridad solamente dejó insubsistente la recitada resolución, y resulta insuficiente el haber remitido las constancias del juicio agrario a la Unidad Técnica Operativa (autoridad competente para realizar los trámites de la asamblea general) para que este realice la depuración censal.*

*Aunado a lo anterior, el propio Tribunal Agrario reconoce que el acuerdo del veintiuno de Septiembre de dos mil uno, se dictó en vías de cumplimiento, e incluso mediante proveído del doce de Septiembre de dos mil dos, emitió un acuerdo complementario en el que ordenó remitir copia certificada del primer proveído a la Delegación de la Procuraduría Agraria en este Estado de Durango, a efecto de que en coordinación con la representación estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria en la misma entidad federativa, se de cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y que una vez que eso suceda, esa delegación les remita el expediente debidamente integrado, procederá a dictar la resolución correspondiente.*

*No es óbice a tal conclusión, el que en la concesión del amparo no figure como autoridad responsable de la Secretaría de la Reforma Agraria, ni la Unidad Técnica Operativa, dado que es el propio Tribunal Agrario quien debe vigilar la debida integración del expediente agrario a fin de que le sea turnado para dictar la resolución correspondiente, puesto que el mismo artículo tercero transitorio de la Ley Agraria y del Reglamento Interior de esa legislación, prevén la posibilidad de reponer el procedimiento cuando exista violación a la garantía de audiencia que tutela el artículo 16 Constitucional.*

*Apoya lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J 72/98, página 429; del Tomo VIII, Septiembre de 1998, de la Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:*

**TRIBUNALES AGRARIOS. SON AUTORIDADES SUSTITUTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO RELACIONADAS CON ACUERDOS DOTATORIOS DE TIERRAS.** (Se reproduce)

*En esas condiciones, es evidente que con ese proceder no se restituyó a los quejados en el pleno goce de la garantía legal violada, en términos de lo previsto por el artículo 80 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, el presente recurso de queja debe declararse fundado, a fin de que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario con residencia en México, Distrito Federal, realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la asamblea general que tendrá por objeto la depuración censal, observando las formalidades de audiencia; hecho esto se integre debidamente el expediente y en estado de resolución le sea remitido para que proceda a dictar la resolución que en derecho proceda."*

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

8.- El Tribunal Superior Agrario, en estricto cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de queja que deriva de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto número 345/2000, por acuerdo tomado en sesión del Pleno de fecha veintinueve de enero de dos mil cuatro, determinó lo siguiente:

**"PRIMERO.- Remítase a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Unidad Técnica Operativa dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, copia certificada del presente acuerdo, de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 345/2000, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente en el que quede legalmente notificado del presente acuerdo y en el ámbito de su competencia, por conducto de la autoridad que al efecto se designe, expida la convocatoria para celebrar los trabajos de depuración censal a que se refieren los artículos 287 y 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria.**

**SEGUNDO.- Solicítese a la dependencia referida en el punto que antecede que una vez complementado lo ordenado en el resolutivo anterior, remita a este órgano jurisdiccional debidamente integrado y en estado de resolución el expediente administrativo agrario sin número, relativo a la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal al poblado Francisco Montes de Oca, municipio de Durango, estado de Durango, a fin de que se dicte la sentencia definitiva que en derecho proceda.**

**Tercero.- Remítanse a la Delegación de la Procuraduría Agraria en el estado de Durango, copias certificadas del presente acuerdo, para los efectos legales procedentes..."**

9.- Consta en autos que después de diversos requerimientos que el Tribunal Superior Agrario dirigió a la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que remitiera los trabajos y diligencias ordenados en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Durango, en el juicio de amparo indirecto 345/2000, el Director General Adjunto de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, dependiente de esa Secretaría de Estado, por oficio número REF: II-210 DGPPR-DGATO 52845, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, remitió cinco legajos de las constancias

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

del expediente original que corresponden a la acción de ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado de que se trata, y dos legajos relativos a la reestructuración del comité particular ejecutivo y a la depuración censal de los solicitantes de tierras.

10.- En cuanto al desahogo de los trabajos relativos a la depuración censal, consta en autos que estos fueron realizados por los comisionados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, licenciados Roberto Carlos Gurrola Nevárez y Raúl Octavio Caldera Rodríguez, en coordinación con el ingeniero Gonzalo Rodríguez Ibarra, comisionado por la Procuraduría Agraria, quienes rindieron su informe relativo al veinte de octubre de dos mil quince, en el que substancialmente manifestaron lo siguiente:

a). Con fecha seis de julio de dos mil quince, en unión del comité particular ejecutivo se procedió a lanzar en primera convocatoria a la asamblea general de ejidatarios del poblado Francisco Montes de Oca, municipio de Durango estado de Durango, así como a los beneficiarios de la segunda ampliación de ejido, a fin de instalar la junta censal, dentro del expediente de tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, que deriva de la acción antes citada, que fue convocada para realizarse el dieciséis de julio del año en cita, levantándose acta de no verificativo de la asamblea ejidal en la fecha señalada, al no reunirse el quórum legal que establece el artículo 24 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por lo que se procedió a lanzar segunda convocatoria con los apercibimientos de ley que prevé el propio numeral, las notificaciones correspondientes, así como la publicación y fijación de los avisos correspondientes (legajo VII) en los lugares habituales y destinados para tal efecto.

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

b). En la fecha señalada para que tuviera verificativo la asamblea de ejidatarios, veinticuatro de julio de dos mil quince, con la presencia de los convocados y los comisionados, en unión del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia del poblado de que se trata, el comité particular ejecutivo que representa a los solicitantes de la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal se reunieron en el sitio habitual para sesionar, a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 345/2000, instalando válidamente al efecto la asamblea general para proceder a constituir legalmente la junta censal, tendiente a la realización de la depuración censal de los solicitantes de tierras, tomando en cuenta el padrón de 43 (cuarenta y tres) personas que fueron señaladas como solicitantes originales de la segunda ampliación de ejido, el padrón de 33 (treinta y tres) campesinos que recibieron la posesión precaria del predio "Santa Anita", de conformidad con el acta levantada el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, así como el padrón de 25 (veinticinco) campesinos que resultaron de la depuración censal elaborada por personal de la Procuraduría Agraria, con fecha el veintitrés de enero mil novecientos noventa y ocho.

c). Una vez desahogados los puntos del orden del día de la asamblea, los comisionados emitieron su opinión en el sentido de que existen un total de cuarenta y tres campesinos que reúnen los requisitos de capacidad agraria para la presenta acción, de conformidad con los artículos 197 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En este punto, cabe señalar que en el acta relativa a la asamblea general que se verificó el veinticuatro de julio de dos mil quince, de su contenido se conoce que se llevó a cabo en los términos siguientes:

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**"Orden del día**

1. **Lista de asistencia.**
2. **Verificación del Quorum Legal e instalación de la Asamblea.**
3. **Lectura de los oficios de Comisión y Presentación de los Comisionados.**
4. **Proceder a constituir legalmente la junta censal para llevar a cabo también la depuración censal, dentro del expediente de Tercera Ampliación de Ejido en Cumplimiento a la Ejecutoria dictada con fecha 28 de agosto de 2000 por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; la resolución emitida en el recurso de queja de fecha 19 de Noviembre de 2003 por el juzgado antes referido, ambas resoluciones dentro del juicio de amparo número 345/2000, promovido por Carlos Ibarra Saucedo, Adalberto Ibarra Salcido, María Dolores Ibarra Hernández, Pánfilo De León Lobatos, Salvador Cesar Castro Galindo, Ma. Encarnación Pérez Vázquez, Jesús Mayorga Valdez, Manuel Mayorga Valdez, Ramón Ibarra Saucedo, Antonio Ibarra Hernández, Trinidad Leal Ramos, Juan Castro Galindo, Isabel Mejía Valdez, Ma. Luisa Razo Salazar, Mauricio Mayorga Valdez y Roberto Mayorga Valdez y en cumplimiento al oficio REF: II-210-DGPR-DGATO 50556 signado por el Lic. Isaías García Robledo, Director General Adjunto de la Dirección General Adjunta Técnico Operativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en donde solicita se comisione personal adscrito de esta Delegación, para que en coordinación con personal de la Procuraduría Agraria en la Entidad, se lleven a cabo las diligencias ordenadas por el Tribunal Superior Agrario, en su proveído de fecha 3 de febrero de 2015; oficio REF: II210-DGPR-DGATO 50563, signado por el Lic. Isaías García Robledo, Director General Adjunto de la Dirección General Adjunta Técnico Operativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dirigido a la Lic. Tania Martínez García, Subdirectora Jurídica Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el que le informa que ya solicitó a la Secretaría en el Estado de Durango, que comisione al personal de su adscripción para que en coadyuvancia con el personal de la Procuraduría Agraria en la Entidad, realicen la reestructuración del Comité Particular Ejecutivo y se lleve a cabo la Depuración Censal ordenada en el acuerdo de fecha 3 de febrero del año en curso.**
5. **Clausura de la Asamblea.**

**Punto Uno.-** Se nombró lista de asistencia, estando presentes 9 (nueve) ejidatarios de los noventa y uno que integran el ejido y que actualmente tienen vigentes sus derechos, según el padrón remitido por el Delegado del Registro Agrario Nacional mediante oficio número SR/1571/2015 de fecha 15 de mayo del 2015; en lo referente a los beneficiados de la Segundo y/o Tercera Ampliación de Ejido, se da cuenta del padrón de solicitantes de la segunda ampliación del ejido Francisco Montes de Oca, Municipio de Durango, Durango, en el cual por Resolución Presidencial de fecha 2 de febrero de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de febrero de 1979, en el considerando segundo se determina que ha quedado demostrada la capacidad de 43 individuos con derecho a ampliación, sin mencionar dicha resolución los nombres de los beneficiados, sin embargo, en base a los antecedentes que obran en el expediente integrado en la

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

*Delegación Estatal de SEDATU, se cuenta con un listado de nombres de los 43 (cuarenta y tres) solicitantes, de fecha 6 de marzo de 1984 firmado por el Presidente del Comisariado Ejidal, y el Consejo de Vigilancia y los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, así mismo se cuenta con el antecedente del acta de posesión precaria relativa a la entrega del Predio del Fraccionamiento Bpca del Mezquital y El Bagre, publicado en el municipio y Estado de Durango, y que fueron adquiridos por la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la oficialía Mayor, mediante convenio de fecha 29 de octubre de 1993, a favor del poblado Francisco Montes de Oca, del Municipio y Estado de Durango, de fecha 26 de Noviembre de 1993, y en donde estuvieron presentes los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, así como un grupo de 33 (treinta y tres) beneficiados, así mismo se cuenta con un padrón de 25 (veinticinco) posesionarios del Predio Santa Anita, con una superficie de 225-95-80 hectáreas Nevado a cabo con fecha 23 de enero de 1998, con la intervención de un representante de la Procuraduría Agraria, estando este acto 19 (diecinueve) presentes de posesionarios y/o beneficiados de los documentos antes citados.*

*Punto Dos.- En atención al Punto anterior se establece el QUORUM LEGAL a que se refiere el artículo 24 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que se cuenta con un 9.89% del total de ejidatarios, por lo que se declara legalmente instalada la asamblea por ser la segunda convocatoria, en ese sentido se llevará a cabo con los ejidatarios que se encuentran presentes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 31, 32 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria.*

*Punto Tres.- Se da lectura a los oficios de comisión de los servidores públicos de SEDATU y Procuraduría Agraria, mediante los cuales fueron comisionados para participar en los actos de depuración censal, ordenados por el Tribunal Superior Agrario, en acatamiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado.*

*Punto Cuarto.- En este acto de conformidad con los artículos 286, 287 y 288 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se produce a conformar la Junta Censal que en este acto se integrara por los Comisionados ya antes mencionados, así como por el C. Pedro Leal Mojica, quien es designado en este acto por el Comité Particular como representante de los campesinos peticionarios. No se encuentra ningún representante de la Comisión Agraria Mixta, en virtud de que esta autoridad ya no existe, con motivo de las reformas a la Ley Agraria de 1992, sin embargo se da cuenta que mediante oficio S/N de fecha 16 de julio del 2015, se invitó al Lic. Miguel Ángel Olivera Escalera, Secretario General de Gobierno del Estado de Durango.*

*Procediendo en este acto a levantar el Censo Agrario, haciendo las siguientes aclaraciones:*

*1.- Si bien es cierto la Resolución Presidencial de fecha 2 de febrero de 1938, que fue publicada el 28 de febrero de 1979, se concedió por concepto de Segunda Ampliación de Ejido al Poblado Francisco Montes de Oca, del Municipio y Estado de Durango, para el beneficio de 43 capacitados, también es cierto que dicha*

RIO AGRARIO  
MEXICO  
DE ACUERDO  
ANGO, DGO



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

resolución presidencial no contempla un listado de que personas sean los beneficiados por esta resolución presidencial, por lo tanto, se tomara en consideración el padrón de fecha 6 de marzo de 1984, firmado por el Presidente del Comisariado Ejidal, el Consejo de Vigilancia, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, que contempla un listado de 43 personas y que el mismo Comité señaló que es la relación de personas solicitantes de la Segunda Ampliación del Ejido.

2.- También será tomado en consideración el padrón de posesionarios del Predio denominado Santa Anita, que contiene un listado de 33 posesionarios, de fecha 26 de noviembre de 1993, mediante el cual personal de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria dio en posesión precaria de la superficie de 225-95-80 hectáreas.

3.- Así como el Padrón de posesionarios elaborado con la intervención de la Procuraduría Agraria con fecha 23 de enero de 1998.

4.- Que de conformidad con la Resolución Presidencial de fecha 2 de febrero de 1938, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1939, en la que se consideró por concepto de Segunda Ampliación de Ejido al Roblado Francisco Montes de Oca por una superficie total de 602 hectáreas; que con motivo de ello, con fecha 29 de agosto de 1993, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, la organización campesina denominada Tierra y Libertad Social, así como los representantes del Núcleo Agrario sostuvieron un convenio para resolver el conflicto social suscitado con motivo de la ejecución de las Resoluciones Presidenciales entre ellas la correspondiente a la Segunda Ampliación del Ejido Francisco Montes de Oca, mediante la cual la Secretaría de la Reforma Agraria adquirió una superficie de 1,022-47-74 hectáreas, que integran los predios del fraccionamiento denominado "Boca del Mexquital y El Bagre" ubicados en el municipio y Estado de Durango de los cuales 225-95-80 has., fueron asignadas al Ejido Francisco Montes de Oca.

Hechas tales aclaraciones se procede a realizar la depuración censal en términos del artículo 286 y 287 en relación con el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para lo cual se toman en cuenta los siguientes listados:

Listado de fecha 6 de marzo de 1984		
Nombre	Presente	Observaciones
1.- Conrado Pérez Reyes	No asiste	Si se encuentra en posesión de sus derechos
2.- Pánfilo de León Lobatos	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
3.- Juan de León Avitia	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos.
4.- Flavio González Salas	No asiste	Se hace la observación que los derechos que le corresponden, los posee José Isabel Mejía Valdez.
5.- Filemón Mercado Olivas	No asiste	Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
6.- Alfonso Arroyo Barbosa	No asiste	Los Derechos los tiene en posesión el C. Cleto García Contreras.
7.- Adolfo Castro Galindo	No asiste	Se hace la observación que los

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

		derechos que le corresponde, los tiene en posesión su hermano Cesar Salvador Castro Galindo.
8.- Dolores Ibarra Viuda de León.	No asiste	Finada. Los derechos los reclama su hijo de nombre Enrique de León Ibarra, quien se encuentra presente en esta asamblea.
9.- Natividad del Villar Viuda de Reyes	No asiste	Se manifiesta que se encuentra enferma, y manifiestan que está en posesión de sus derechos.
10.- María Encarnación Pérez Vázquez	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
11.- Rubén Leal Castañeda.	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Antelma Consolación Montes, quien se encuentra presente en esta asamblea
12.- Baltazar Silva Espinoza	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
13.- Teodoro de León Andrade	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
14.- Juan Razo Escobar.	No asiste	Finado. Está en posesión de sus derechos por parte de su hijo Juan Ángel Razo Ávila.
15.- Ricardo Castro Galindo	No asiste	Se manifiesta que sus derechos los tiene en posesión su hermano Juan Castro Galindo
16.- José Humberto Reyes Ortiz	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
17.- Antonio Ibarra Hernández	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hijo José Isabel Ibarra Salcido, quien se encuentra presente en esta asamblea
18.- Jesús Solís Gutiérrez	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa de nombre María Luisa Razo Salazar, quien se encuentra presente en esta asamblea.
19.- José Camerino Leal Salas.	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su sobrino José Trinidad Leal Ramos, quien se encuentra presente en esta asamblea
20.- Cleto García Hernández	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Rebeca Contreras.
21.- Manuel Andrade Montes.	No asiste	Sus derechos los tiene en posesión el C. Crescencio López Rivera.
22.- Rodolfo de León Avitia	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
23.- Mauricio Mayorga Valdez	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos.
24.- Manuel Mayorga Valdez	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hijo Valentín Mayorga Ramos, quien se encuentra presente en esta asamblea.
25.- Jesús Pérez Vázquez.	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos.
26.- Adalberto Ibarra Salcido	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hermano Edmundo Ibarra Salcido, quien se encuentra presente en esta asamblea.
27.- Roberto Mayorga Valdez	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos.
28.- Martín del Villar Quiroz	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
29.- Rodolfo de León Castro	No asiste	Sus derechos los tiene en posesión su hermano Salvador de León Castro
30.- Teodoro Leal Salas.	No asiste	Está en posesión de sus Derechos, y en su representación comparece su

RIO AGRI  
S MEXICO  
DE ACUERDO  
ANGU, DGO

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

31.- Ramón Ibarra Saucedo	Si asiste	hijo Felipe de Jesús Leal Mojica Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
32.- Jesús Mayorga Valdez	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
33.- Humberto Ibarra Hernández	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hijo Carlos Ibarra Saucedo, quien se encuentra presente en esta asamblea
34.- Matías de León Castro	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
35.- Ismael Andrade Bueno	No asiste	Sus derechos los tiene en posesión el C. Enrique de León Rosales
36.- Luis García Contreras	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
37.- Hugo del Villar Quiroz	No asiste	Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
38.- Florentino Silva Torres	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos.
39.- Rodolfo Luján Vargas	No asiste	Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
40.- Juan López Limones	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
41.- Vicente López Limones	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
42.- Manuel Valles Quiroz	No asiste	Sus derechos los tiene en posesión su hermano Tiburcio Valles Quiroz, que se encuentra presente en la asamblea
43.- Manuel Márquez Díaz	No asiste	Manifiestan quién sea esta persona, y no se encuentra en posesión de derechos.

Posesión precaria del 26 de noviembre de 1993		
Nombre	Presente	Observaciones
1.- Luis García Contreras	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos.
2.- Cleto García Contreras	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos.
3.- Ramón Ibarra Saucedo	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
4.- Carlos Ibarra Saucedo	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
5.- Adalberto Ibarra Salcido	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hermano Edmundo Ibarra Salcido, quien se encuentra presente en esta asamblea
6.- Matías de León Castro	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
7.- Salvador de León Castro	No asiste	Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
8.- Florentino Silva Torres	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
9.- Vicente López Limones	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
10.- Conrado Pérez Reyes	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
11.- Teodoro de León Andrade	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
12.- Juan del Villar Quiroz	No asiste	Finado. Se desconoce quién en posesión de sus derechos
13.- Martín del Villar Quiroz	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
14.- Hugo del Villar Quiroz	No asiste	Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
15.- José Humberto Reyes Ortiz	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos

TRIBUNAL  
Agrario

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

16.- Luis Ayala Ibarra	No asiste	Se desconoce quién está en posesión de sus derechos.
17.- Teodorico Leal Salas	No asiste	Está en posesión de sus Derechos, y en su representación comparece su hijo Felipe de Jesús Leal Mojica
18.- Trinidad Leal Ramos	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
19.- Pánfilo de León Lobatos	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
20.- Ma. Encarnación Pérez	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
21.- Ma. Luisa Razo Salazar	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
22.- Alberto Ibarra Salcido	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hermano Edmundo Ibarra Salcido, quien se encuentra presente en esta asamblea.
23.- Juan Razo Avila	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
24.- Manuela Castañeda Rodríguez	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
25.- Juan Castro Galindo	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
26.- José Isabel Mejía Valdez	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
27.- Tiburcio Valles Quiroz	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
28.- Enrique de León Rosales	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
29.- Rubén Leal Castañeda	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Antelma Consolación Montes
30.- Cesar Castro Galindo	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
31.- Natalidad del Villar Barretero	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
32.- María Dolores Ibarra Hernández	No asiste	Finado. Los derechos los reclama su hijo de nombre Enrique de León Ibarra, quien se encuentra presente en esta asamblea.
33.- Baltazar Silva Espinoza	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos

#### Padrón de Poseisionarios de 23 de enero de 1998

Nombre	Presente	Observaciones
1.- Hortencia Murillo Ortiz	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiaria de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.
2.- Martín del Villar Quiroz	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
3.- Rodolfo de León Avitia	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
4.- Manuela Castañeda Rodríguez	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
5.- Juan de León Avitia	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
6.- Baltazar Espinoza	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
7.- Rubén Leal Castañeda	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Antelma Consolación Montes
8.- Jesús Pérez Vázquez	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
9.- Cleto García Contreras	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

10.- Cleto García Hernández	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Rebeca contreras
11.- Juan Ángel Razo Ávila	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
12.- Luis García Contreras	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
13.- Salvador de León Castro	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
14.- Matías León Castro	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
15.- Reynaldo del Villar Mojica	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiario de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.
16.- Florentino Silva Torres	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
17.- Teodoro de León Andrade	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
18.- Enrique de León Rosales	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
19.- Crescencio López Rivera	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
20.- Conrado Pérez Reyes	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
21.- José Humberto Reyes Ortiz	Si asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
22.- San Juana Murillo Rodríguez	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiaria de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.
23.- María Teresa Ibarra Maldonado	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiaria de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.
24.- Natividad del Villar Barretero	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos
25.- Vicente López Llimones	No asiste	Se manifiesta que está en posesión de sus derechos

En este orden de ideas, en el presente caso, queda demostrado que para resolver la presente acción agraria sólo se toman en cuenta un total de **57 (cincuenta y siete)** campesinos que acreditaron su capacidad agraria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 200, en relación con el 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, quienes en el acta relativa a la depuración censal, acreditaron estar en posesión precaria de las tierras adquiridas por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, para satisfacer las necesidades de tierras del poblado denominado Francisco Montes de Oca, municipio de Durango, de la misma entidad federativa.

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

Lo anterior, tomando en consideración que en la Resolución Presidencial dictada por el Presidente de la República el dos de febrero de mil novecientos treinta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, fueron reconocidos como ejidatarios, un total de 43 (cuarenta y tres) campesinos, cuyos nombres se relacionan en primer término, en el acta relativa a la depuración censal de los solicitantes de tierras.

En este orden de ideas, se hace la aclaración, que para la presente acción agraria, sólo se toman en consideración a los 33 (treinta y tres) campesinos con los que se llevó a cabo la entrega precaria de tales tierras, conforme al acta levantada por los comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en cumplimiento al convenio celebrado el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, así como los 25 (veinticinco) campesinos que fueron reconocidos como beneficiados por la sentencia emitida por este Tribunal Superior Agrario el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho (relacionados en el considerando segundo), con quienes se practicó la ejecución de la sentencia referida, mediante acta de posesión y deslinde de fecha uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, no obstante que dicha sentencia, así como su ejecución se dejaron sin efectos en virtud de la ejecutoria dictada en el amparo indirecto número 345/2000, por el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Durango, a la que se da cumplimiento, ya que no se puede soslayar la posesión que detentan ambos grupos de campesinos, que deriva de un acto de autoridad, en uno y otro caso; lo anterior, en aras de no vulnerar los derechos fundamentales surgidos de este acto, que desde luego protegen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los siguientes:

TO AGRARIO  
MEXICANOS  
ACUERDO  
NGO, DGO

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**"Posesión precaria de 26 de noviembre de 1993**

- 1.- Luis García Contreras
- 2.- Cleto García Contreras
- 3.- Ramón Ibarra Saucedo
- 4.- Carlos Ibarra Saucedo
- 5.- Adalberto Ibarra Salcido
- 6.- Matías de León Castro
- 7.- Salvador de León Castro
- 8.- Florentino Silva Torres
- 9.- Vicente López Limones
- 10.- Conrado Pérez Reyes
- 11.- Teodoro de León Andrade
- 12.- Juan del Villar Quiroz
- 13.- Martín del Villar Quiroz
- 14.- Hugo del Villar Quiroz
- 15.- José Humberto Reyes Ortiz
- 16.- Luis Ayala Ibarra
- 17.- Teodoro Leal Salas
- 18.- Trinidad Leal Ramos
- 19.- Pánfilo de León Lobatos
- 20.- Ma. Encarnación Pérez
- 21.- Ma. Luisa Razo Salazar
- 22.- Alberto Ibarra Salcido
- 23.- Juan Razo Ávila
- 24.- Manuela Castañeda Rodríguez
- 25.- Juan Castro Galindo
- 26.- José Isabel Mejía Valdez
- 27.- Crescencio Valles Quiroz
- 28.- Enrique de León Rosales
- 29.- Rubén Leal Castañeda
- 30.- César Castro Galindo
- 31.- Natividad del Villar Barretero
- 32.- María Dolores Ibarra Hernández
- 33.- Baltazar Silva Espinoza

**Padrón de Posesionarios de 23 de enero de 1998**

- 1.- Hortensia Murillo Ortiz
- 2.- Martín del Villar Quiroz
- 3.- Rodolfo de León Avitia
- 4.- Manuela Castañeda Rodríguez
- 5.- Juan de León Avitia
- 6.- Baltazar Espinoza
- 7.- Rubén Leal Castañeda
- 8.- Jesús Pérez Vázquez
- 9.- Cleto García Contreras
- 10.- Cleto García Hernández
- 11.- Juan Ángel Razo Ávila
- 12.- Luis García Contreras
- 13.- Salvador de León Castro
- 14.- Matías León Castro
- 15.- Reynaldo del Villar Mojica
- 16.- Florentino Silva Torres
- 17.- Teodoro de León Andrade
- 18.- Enrique de León Rosales
- 19.- Crescencio López Rivera
- 20.- Conrado Pérez Reyes



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

- 21.- *José Humberto Reyes Ortiz*
- 22.- *San Juana Murillo Rodríguez*
- 23.- *María Teresa Ibarra Maldonado*
- 24.- *Natividad del Villar Barretero*
- 25.- *Vicente López Limones*

De ambos listados no se omite señalar que en el acta relativa a la depuración censal, se hace constar en el primero de éstos, en el rubro de "Observaciones", se hace la anotación en el sentido de que las personas relacionadas con los números: **5.- Adalberto Ibarra Salcido, 8.- Florentino Silva Torres, 12.- Juan De León Avitia, 22.- Alberto Ibarra Salcido, 29.- Rubén Leal Castañeda y 32.- María Dolores Ibarra Hernández**, son finadas.

En el segundo listado, en el mismo rubro de "Observaciones", también se indica que las personas enlistadas con los números **5.- Juan De León Avitia, 7.- Rubén Leal Castañeda, 10.- Cleto García Hernández, Florentino García Torresd16.- y 19.- Crescencio López Rivera**, son finadas.

ACUERDO  
NGO, DGO

Para acreditar este hecho, en autos sólo obran glosadas en los autos del juicio agrario, en el legajo VII, copias simples de las actas de defunción de **Adalberto Ibarra Salcido y María Dolores Ibarra Hernández**, que se relacionan con los números **5 y 32** del primer listado. Documentales a las que se les otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, en relación con el numeral 189 de la Ley Agraria, para tener por acreditado el deceso de estas personas, no así en cuanto a las restantes personas que también se relacionaron en el mismo rubro.

No obstante lo anterior, tampoco se soslaya la circunstancia que las restantes personas que aparecen relacionadas en el rubro de fallecidos, aun cuando no se acredita este hecho con la documental idónea para ello (acta de defunción), en el acta relativa a la depuración



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

censal, se hace la anotación que la posesión que tuvieron las personas fallecidas que aparecen en la primera relación con los números **5, 8, 12, 22, 29 y 32**, la propia asamblea acepta y reconoce en algunos casos que personas se encuentran en posesión de las tierras que detentaron los fallecidos y en otro, desconocen quién detenta la posesión que tuvieron aquellos, a saber:

5.- Adalberto Ibarra Salcido	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hermano Edmundo Ibarra Salcido, quien se encuentra presente en esta asamblea
8.- Florentino Silva Torres	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
12.- Juan del Villar Quiroz	No asiste	Finado. Se desconoce quién en posesión de sus derechos
22.- Alberto Ibarra Salcido	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su hermano Edmundo Ibarra Salcido, quien se encuentra presente en esta asamblea.
29.- Rubén Leal Castañeda	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Antelma Consolación Montes
32.- María Dolores Ibarra Hernández	No asiste	Finada. Los derechos los reclama su hijo de nombre Enrique de León Ibarra, quien se encuentra presente en esta asamblea.

En el segundo listado, también se informa en el rubro de Observaciones, en cuanto a la posesión que tuvieron las personas fallecidas, que se relacionan con los números **5, 7, 10, 16 y 19**, en el acta de asamblea, se hace constar lo siguiente:

5.- Juan de León Avitia	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
7.- Rubén Leal Castañeda	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Antelma Consolación Montes
10.- Cleto García Hernández	No asiste	Finado. Sus derechos los tiene en posesión su esposa Rebeca contreras
16.- Florentino Silva Torres	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos
19.- Crescencio López Rivera	No asiste	Finado. Se desconoce quién está en posesión de sus derechos

Tampoco pasa inadvertido a este Tribunal Superior Agrario que en el segundo listado de 25 (veinticinco) campesinos, la asamblea no reconoce como beneficiarios de la segunda ampliación y/o tercera ampliación de ejido a las personas siguientes:

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

1.- Hortencia Murillo Ortiz	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiaria de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.
15.- Reynaldo del Villar Mojica	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiario de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.
22.- San Juana Murillo Rodríguez	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiaria de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.
23.- María Teresa Ibarra Maldonado	No asiste	Manifiesta la Asamblea que no se reconoce como beneficiaria de la segunda ampliación y/o tercera ampliación derivada de la Incorporación de Tierras del Régimen Ejidal.



Sin embargo, en autos quedó acreditado que estas personas fueron reconocidas en la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional de fecha uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, quienes formaron parte de los veinticinco campesinos con quienes se entendió la ejecución de este fallo, mediante acta de posesión y deslinde que se llevó a cabo el uno de octubre el año en cita; motivo por el cual no se les puede desconocer la posesión que detentan sobre tales terrenos, so pena de vulnerar este derecho real que también les reconocen los artículos 14 y 16 constitucionales.

También se destaca que en ambos listados se repite el nombre de **Rubén Leal Castañeda** en los números 29 y 7.

11.- En este orden de ideas, para la presente acción agraria, se acredita la existencia de un total de 57 campesinos con capacidad en materia agraria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 200 y 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, siendo los siguientes:

- 1.- Luis García Contreras
- 2.- Cleto García Contreras
- 3.- Ramón Ibarra Saucedo
- 4.- Carlos Ibarra Saucedo
- 5.- Edmundo Ibarra Salcido
- 6.- Matías de León Castro

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

- 7.- Salvador de León Castro  
8.- Florentino Silva Torres  
9.- Vicente López Limones  
10.- Conrado Pérez Reyes  
11.- Teodoro de León Andrade  
12.- Juan del Villar Quiroz  
13.- Martín del Villar Quiroz  
14.- Hugo del Villar Quiroz  
15.- José Humberto Reyes Ortiz  
16.- Luis Ayala Ibarra  
17.- Teodoro Leal Salas  
18.- Trinidad Leal Ramos  
19.- Pánfilo de León Lobatos  
20.- Ma. Encarnación Pérez  
21.- Ma. Luisa Razo Salazar  
22.- Alberto Ibarra Salcido  
23.- Juan Razo Ávila  
24.- Manuela Castañeda Rodríguez  
25.- Juan Castro Galindo  
26.- José Isabel Mejía Valdez  
27.- Tiburcio Valles Quiroz  
28.- Enrique de León Rosales  
29.- Rubén Leal Castañeda  
30.- Cesar Castro Galindo  
31.- Natividad del Villar Barretero  
32.- Enrique de León Ibarra  
33.- Baltazar Silva Espinoza  
34.- Hortensia Murillo Ortiz  
35.- Martín del Villar Quiroz  
36.- Rodolfo de León Avitia  
37.- Manuel Castañeda Rodríguez  
38.- Juan de León Avitia  
39.- Baltazar Espinoza  
40.- Jesús Pérez Vázquez  
41.- Cleto García Contreras  
42.- Cleto García Hernández  
43.- Juan Ángel Razo Ávila  
44.- Luis García Contreras  
45.- Salvador de León Castro  
46.- Matías León Castro  
47.- Reynaldo del Villar Mojica  
48.- Florentino Silva Torres  
49.- Teodoro de León Andrade  
50.- Enrique de León Rosales  
51.- Crescencio López Rivera  
52.- Conrado Pérez Reyes  
53.- José Humberto Reyes Ortiz  
54.- San Juana Murillo Rodríguez  
55.- María Teresa Ibarra Maldonado  
56.- Natividad del Villar Barretero  
57.- Vicente López Limones"

Lo anterior, una vez deducido el nombre de las personas fallecidas, relacionadas en los números 5 y 32, de nombres Adalberto Ibarra Salcido y María Dolores Ibarra Hernández, se

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

les sustituye con las personas a quienes la asamblea les reconoce la posesión que detentaron aquellos, que quedaron identificados con los nombres de **Edmundo Ibarra Salcido**, hermano del primero y **Enrique De León Ibarra**, hijo de la segunda, lo cual acreditan con sus respectivas actas de nacimiento.

Sin que lo anterior constituya un obstáculo para establecer que de la interpretación literal del artículo 220 de la Ley Federal de Reforma Agraria, la asamblea general del núcleo de población beneficiado, al llevarse a la dotación, podrá tomar en cuenta no sólo al número de peticionarios que iniciaron el expediente respectivo, sino de los que al momento de ejecutarse, tengan derecho a recibir una unidad de dotación, siendo en el presente caso, aquellos campesinos que se dice entraron a poseer terrenos en sustitución de las personas que fueron señaladas como fallecidas en el acta de depuración censal, sin haber quedado acreditado este hecho, con las pruebas idóneas para ello.

ARIO AGRARIO  
OS MEXIC.  
IA DE ACUERDOS  
JUKANGÜ, DGO

**TERCERO.** Una vez precisado los antecedentes del caso, conviene traer a cuenta, que del análisis de las constancias que obran en el expediente de que se trata, se conoce que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, en unión de los representantes legales de los poblados "Francisco Montes de Oca", "José María Pino Suárez" y "Boca del Mezquital", del municipio de Durango, de la misma entidad federativa, para evitar un conflicto social con tales entes colectivos ante la imposibilidad de ejecutar jurídica y materialmente de manera complementaria sus resoluciones presidenciales de segunda ampliación de ejido y dotación de tierras, celebró un convenio el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, con los propietarios de los diversos lotes de terreno provenientes de los predios denominados "Boca del Mezquital" y "El Bagre", ubicados en el municipio y estado señalados, todos ellos representados por Jorge Castillo Salas por su propio derecho y como

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

apoderado legal de todos ellos, para adquirir a nombre de estos poblados una superficie total de 1,022-47-74 (mil veintidós hectáreas, cuarenta y siete áreas, setenta y cuatro centiáreas), provenientes de esos fraccionamientos, para satisfacer las necesidades de tierras de dichos poblados; por su parte los propietarios, una vez que se les cubrió el pago por la cantidad de N\$ 3,206,325.53 (Tres Millones Doscientos Seis Mil Trescientos Veinticinco Nuevos Pesos 53/100 M.N.), a la firma del convenio, pusieron a disposición de esa dependencia y de los poblados señalados, la superficie de terreno materia del convenio, incluidas las obras de infraestructura sujetas a esos bienes inmuebles.

De conformidad con el contenido del convenio de mérito, de manera exprese indicó que la anterior superficie sería distribuida entre los poblados antes citados, precisándose que en cuanto al poblado denominado "Francisco Montes de Oca", le correspondería una superficie de 225-95-80 (doscientas veinticinco hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta centiáreas) de riego, temporal y agostadero.

A tal documental que obra en autos en copia certificada a fojas 487-502, legajo I, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, en relación con el numeral 189 de la Ley Agraria, se le otorga valor probatorio pleno, con la que se acredita que la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, representada por el Oficial Mayor y el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, adquirió de diversos propietarios una superficie de 1,022-47-74 (mil veintidós hectáreas, cuarenta y siete áreas, setenta y cuatro centiáreas), provenientes del fraccionamiento de los predios "Boca del Mezquital y "El Bagre", ubicados en el municipio y estado señalados, todos ellos representados por Jorge Castillo Salas, en su

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

carácter de apoderado legal, en los términos y para los efectos que se precisan en el convenio de mérito.

Por otra parte, en autos consta que la superficie que se destinó para el poblado que nos ocupa, fue deslindada y entregada materialmente conforme al acta de posesión precaria de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres (fojas 511-515, legajo I), constando en el plano relativo a su levantamiento topográfico, que tales terrenos arrojaron una superficie analítica de 220-22-96.49 (doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve milíáreas), que se integra por diversos lotes de terreno siguientes: "Lote 6", "Lote 20", "Lote 40", "Lote 25", "Lote 12" y del predio "El Bagre", "Lotes 41, 1 y 34"; de la fracción segregada del "Lote 16", "Lote 14", "Lote 15", "Lote 10", "Lote 32", "Lote 24", todos provenientes del fraccionamiento de los predios "Boca del Mezquital y El Bagre", hoy conocido como "Santa Anita", ubicados en el municipio y Estado de Durango, los que se convino por parte del núcleo beneficiado y la propia Secretaría de la Reforma Agraria, serían incorporados al régimen ejidal, toda vez el citado núcleo de población, ya cuenta con terrenos concedidos por concepto de dotación de tierras, primera y segunda ampliación de ejido.

A esta documental se le otorga valor probatorio, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, en relación con el artículo 189 de la Ley Agraria, toda vez que fue suscrita por funcionarios en ejercicio de sus funciones, con la que se acredita la entrega material de la superficie deslindada, en cumplimiento del convenio celebrado el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres.



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

**CUARTO.** En razón de lo expuesto, en el presente caso procede declararse procedente la acción de tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal instaurado en favor del poblado denominado "Francisco Montes de Oca", municipio de Durango, estado de Durango; por consiguiente, ha lugar a la dotación una superficie de 220-22-96.49 (doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve miliáreas) de diversas calidades, que fueron adquiridas por la Secretaría de la Reforma Agraria actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 241 en relación con el 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para satisfacer las necesidades agrarias del poblado referido.

La anterior superficie, pasará a ser propiedad del núcleo de población "Francisco Montes de Oca", Municipio de Durango, Estado de Durango, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, para establecer en ésta los derechos agrarios que corresponden a los

**57 campesinos capacitados que resultaron de la depuración censal.** En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

Esta superficie deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en los autos a foja 13 del tomo II, del expediente administrativo.

En apoyo a lo anterior, en el presente caso, resulta aplicable la jurisprudencia establecida por el Pleno de este Tribunal Superior Agrario, en sesión de seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro,

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

publicada en el Boletín Agrario; tomo correspondiente al mes de septiembre del mismo año, número 26, del rubro y texto siguiente:

**"AMPLIACIÓN DE EJIDO POR INCORPORACIÓN DE TIERRAS AL RÉGIMEN EJIDAL, PROCEDE DECRETARLA DE PLANO, AÚN SIN HABERSE TRAMITADO PROCEDIMIENTO AMPLIATORIO, CUANDO LA AFECTACIÓN RECAE EN TIERRAS DE PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS O FUERON PUESTAS A SU DISPOSICIÓN PARA SATISFACER NECESIDADES AGRARIAS.-** Cuando se haya dictaminado un procedimiento de Incorporación de Tierras al Régimen Ejidal sobre predios propiedad de la Federación, de los Estados o de los Municipios, o que hayan sido puestos a su disposición para satisfacer necesidades agrarias, a favor de núcleos de población ejidal que ya hayan sido beneficiados con dotaciones, y del estudio del expediente se desprenda que no se tramitó el procedimiento ampliatorio, competente al Tribunal Superior Agrario declarar procedente de plano la ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, con fundamento en los artículos 204 y 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, tercero transitorio del Decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, tercero transitorio de la Ley Agraria; y cuatro transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios".

ARIO Agrario  
OS MEXICANOS  
A DE ACUERDO  
URANGO. DGC

**QUINTO.** En virtud de que dentro de las 220-22-96.49 (doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve milíáreas), que se conceden al poblado beneficiado, se localizan terrenos de riego, con fundamento en los artículos 229 y 330 de la Ley Federal de Reforma Agraria, procede dotarse al poblado de referencia con el volumen de aguas necesarias y suficientes, para el riego de la superficie que tenga esa calidad, en los términos que fija la Ley de Aguas Nacionales y la normatividad establecida por la Comisión Nacional del Agua.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1º, 7º y la fracción



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios,  
se

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** Es procedente la tercera ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, a favor del núcleo de población denominado "Francisco Montes de Oca", Municipio de Durango, Estado de Durango.

**SEGUNDO.** Es de dotarse y se dota al poblado referido en el punto resolutivo anterior, con una superficie de 220-22-96.49 (doscientas veinte hectáreas, veintidós áreas, noventa y seis centiáreas, cuarenta y nueve milíáreas) de riego, temporal y agostadero, que toman de los lotes de terreno identificados en la forma siguiente: "Lote 6", "Lote 20", "Lote 40", "Lote 25", "Lote 12" y del predio "El Bagre", "Lotes 41, 1 y 34"; de la fracción segregada del "Lote 14", "Lote 15", "Lote 10", "Lote 32", "Lote 24", todos del fraccionamiento de los predios denominados "Boca del Mezquital y El Bagre", hoy conocido como "Santa Anita", ubicados en el Municipio y Estado de Durango; afectables con fundamento en lo dispuesto por el artículo 241 en relación con el 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La anterior superficie que se concede, deberá localizarse conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, para fincar en ésta los derechos agrarios que corresponden a los 57 campesinos que

Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

acreditaron su capacidad agraria. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

**TERCERO.** Se dota al poblado de referencia, con el volumen de aguas necesarias y suficientes para el riego de la superficie de terreno que resulte con dicha calidad que se concede en la presente sentencia, con fundamento en los artículos 229 y 230 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con las modalidades y en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales, y conforme a la normatividad que establezca la Comisión Nacional del Agua.

**CUARTO.** Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango; los puntos resolutive de la misma en el Boletín Judicial Agrario. Inscribáse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a realizar la inscripción respectiva en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos conforme a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.

**QUINTO.** Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Durango, a la Procuraduría Agraria, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por conducto de la Oficialía Mayor, así como a la Comisión Nacional del Agua.

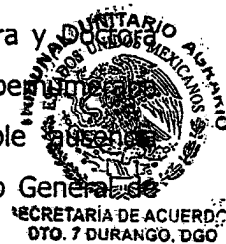
**SEXTO.** Con copia certificada de la presente sentencia, en vía de notificación, comuníquese al Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Durango, sobre el cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en



Juicio Agrario 22/1998  
C.E. Juicio de Amparo 345/2000

el juicio de amparo indirecto número 345/2000, de fecha veintiocho de agosto de dos mil. Ejecútase y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Pleno del Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados Numerarios Licenciados Luis Ángel López Escutia, Maribel Concepción Méndez de Lara y Odilisa Gutiérrez Mendoza, así como la Magistrada Suplente Licenciada Carmen Laura López Almaraz, quien suple permanente de Magistrado Numerario, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.



MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. LUIS ÁNGEL LÓPEZ ESCUTIA

MAGISTRADAS

Maribel Méndez de Lara  
LIC. MARIBEL CONCEPCIÓN MÉNDEZ DE LARA

DRA. ODILISA GUTIÉRREZ MENDOZA

LIC. CARMEN LAURA LÓPEZ ALMARAZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS



LIC. CARLOS ALBERTO BROISSIN ALVARADO  
EL SUSCRITO LICENCIADO (A) Gustavo Carraón Borciaga SECRETARIO  
DE ACUERDOS B DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO  
7, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY  
ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS CERTIFICA: QUE LA  
PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL  
JUICIO AGRARIO 022/98, QUE DOY FE HABER TENIDO A LA VISTA  
CON EL CUAL COTEJÉ PERSONALMENTE LA PRESENTE  
REPRODUCCIÓN, QUE VA EN 50 FOJAS ÚTILES, DURANGO,  
DGO., A 25 DEL MES DE septiembre DE 20 22 CON



**PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**LIC. HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, DIRECTOR GENERAL**

Profesora Francisca Escárcega No. 208, Colonia del Maestro, Durango, Dgo. C.P. 34240

**Dirección del Periódico Oficial**

Tel: 1 37 78 00

*Dirección electrónica: <http://secretariageneral.durango.gob.mx>*

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado